

MINISTERIO PÚBLICO Y QUERELLANTES C/ RODRIGO ALEJANDRO ORMEÑO GÓMEZ, FREDDY JONATHAN RIQUELME CUEVAS Y CÉSAR ATRICIO GARCÉS RÍOS.

RUC N°2200976307-8

RIT N°73-2023

DELITO: Robo con violencia, sustracción de madera tipo hurto simple, amenazas simples.

Cañete, diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro.

VISTO, OIDO LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: *Tribunal e intervinientes.* Que los días siete, ocho, once, doce, trece, y catorce de marzo del año dos mil veinticuatro, ante los magistrados Rodrigo González-Fuente Rubilar, quien presidió la audiencia, Julio Ramírez Paredes y José Martín Cánovas Fuentes, se llevó a efecto la audiencia de juicio oral en esta causa RIT N°73-2023 seguida en contra de **Rodrigo Alejandro Ormeño Gómez**, cédula de identidad N°13.578.781-7, nacido el 19 mayo de 1979 en Curanilahue, 44 años, con estudios superiores, transportista, domiciliado en Población Eleuterio Ramírez, Pasaje 5 casa N°25, comuna de Curanilahue; **Freddy Jonathan Riquelme Cuevas**, cédula de identidad N°16.498.619-5, nacido el 30 de julio de 1986 en Curanilahue, 37 años, casado, enseñanza media rendida, transportista, domiciliado en Pichiarauco, Parcela N°4 S/N, comuna de Curanilahue; y **César Atricio Garcés Ríos**, cédula de identidad N°13.803.180-2, nacido el 22 agosto de 1972 en Curanilahue, 51 años, soltero, hasta primero medio rendido, conductor de camión, domiciliado en Población Chillancito, Los Pinos N°570, comuna de Curanilahue.

Fue parte acusadora en este juicio el Ministerio Público, representado por el fiscal don Juan Yáñez Martinich, el querellante Forestal Arauco S.A. representado por el abogado Enrique Hernández Núñez y el querellante Delegación Presidencial Regional del Biobío representado por el abogado Felipe Guerrero Sánchez, todos con domicilio y forma de notificación, ya registrados en el tribunal.

La defensa del acusado Ormeño Gómez fue ejercida conjuntamente por los defensores particulares Andrés Morales Soza y Werner Jans Sanhueza y la defensa de los acusados Riquelme Cuevas y Garcés Ríos estuvo a cargo del abogado Werner Jans Sanhueza, ambos abogados con domicilio y forma de notificación ya registrados en el tribunal.

SEGUNDO: *Acusaciones.* Que la Fiscalía fundó la acusación deducida en contra de los acusados y, según se lee en el auto de apertura de juicio oral, en los siguientes hechos:

Hechos atribuidos como número uno: “El día 31 de enero del año 2021 aproximadamente a las 02:00 horas, el acusado RODRIGO ALEJANDRO ORMEÑO GOMEZ, portando un arma de fuego corta llegó, acompañado de un grupo de sujetos, todos encapuchados, con chalecos antibala y con armas de fuego cortas y largas disparando al aire, hasta el predio Rural denominado Fundo Chilcoco, sector Agua Pié ubicado en el Kilómetro Dos de la Ruta P-344, Comuna de Arauco, lugar donde se emplazan en diversas casas habitación, en específico los domicilios de las víctimas Jose Miguel Antileo Martinez; Claudia Alvarez Torres, Marcela Antileo Álvarez, Luis Esteban Antileo Alvarez, Miguel Antileo Álvarez y Juana Yolanda Fernández fuentes.

En un primer momento Rodrigo Ormeño Gómez junto a los otros sujetos aún no identificados rompen la puerta de acceso al domicilio de Luis Esteban Antileo Alvarez quien se encontraba junto a su cónyuge Juana Fernández Fuentes y un hijo menor de dos años, y una vez dentro golpean con pies y puños y con escopetas en el cuerpo y la cabeza al dueño de casa, lo lanzan al suelo, registran la casa, y luego de 20 minutos aproximadamente se retiran sacándole y llevando la suma de tres millones de pesos en efectivo más una camioneta marca Ford Ranger color azul patente FCPC94, una camioneta Mazda BT 50 color blanco patente JZVD78, su teléfono móvil marca Samsung y a la dueña de casa doña Juana Fernández Fuentes le sustraen la suma de dos millones trescientos mil pesos y su teléfono móvil marca Samsung. Luego de cometido este hecho, el mismo Rodrigo Alejandro Ormeño Gómez, acompañado de los otros sujetos entraron a la casa habitación de Miguel Simón Antileo Alvarez, a quien golpearon en la cara, tiraron al suelo y le sustrajeron la suma de cinco millones de pesos y una camioneta marca Toyota Hilux patente FPRP70. Posteriormente, continuando con los delitos, ingresaron violentamente a la casa de don José Miguel Antileo Martínez y doña Claudia Carolina Álvarez Torres, quienes, al sentir disparos en las afueras de su casa, observaron cuando el acusado Rodrigo Alejandro Ormeño Gómez y los otros autores entraron momentos antes a la casa de su hijo Miguel Simón Antileo Alvarez. En eso sintieron un fuerte golpe en la puerta de la casa observando que entraron siete personas aproximadamente diciendo que eran de la PDI quienes los amarraron de pies y manos con tiras plásticas, golpearon en la cabeza a don José Miguel Antileo Martínez y luego tomaron, se llevaron y sustrajeron la suma de 45 millones de pesos de don José Miguel Antileo Martínez, una camioneta Toyota Hilux año 2020 doble cabina color rojo, y un rifle marca Winchester que el mismo Rodrigo Ormeño Gómez le había regalado a la víctima días antes por un negocio de venta de madera que habían realizado. A doña Claudia Álvarez Torres le sustrajeron dinero de su propiedad en una suma de tres millones quinientos mil pesos.- Luego salieron de la casa, disparando al aire y llevándose el dinero de las

víctimas y las camionetas señaladas. Las víctimas todas resultaron con lesiones de carácter leve constatadas en el Hospital San Vicente de Arauco". (sic)

Hechos atribuidos como número dos: "La madrugada del 04 de octubre del 2022, los acusados Jonathan Freddy Riquelme Cuevas, Cesar Patricio Garcés Ríos y Rodrigo Alejandro Ormeño Gómez, previamente concertados y provistos de vehículos motorizados al efecto, hicieron ingreso al predio forestal denominado San José de Colico, que se encuentra a la altura del kilómetro uno de la ruta 254 que conecta la ruta 160 con la localidad de San José de Córico de la comuna de Curanilahue, y una vez que se encontraban al interior del referido predio forestal los acusados sacaron y sustrajeron madera consistente en pino insigne, en términos de que cargaron los camiones que tenían destinados al efecto, así el camión marca Volvo placa patente BFRX-30 y el camión marca Volvo placa patente DPRV-39 fueron cargados con una cantidad total de 23 metros cúbicos con un avalúo total de \$1.500.000, para luego salir del predio y llevarse para sí esta madera sin la voluntad de su dueño Forestal Arauco S.A. A continuación los camiones que conducidos por Cesar Patricio Garcés Ríos y Fredy Jonathan Riquelme Cuevas toman la ruta 160 hacia el Sur con destino o dirección de Curanilahue siendo escoltados en todo momento por el Jeep placa patente CSZH-58 conducido por Rodrigo Alejandro Ormeño Gómez. Los supervisores forestales Daniel González Rubio y Jorge Navarrete Vera, que observaron el hecho, comunicaron esta situación a Carabineros de la Cuarta Comisaria de Curanilahue los que dentro de la misma comuna de Curanilahue a la altura del cruce del sector Villa Alegre de la Ruta 160 controlaron a los referidos vehículos con sus conductores, deteniéndolos. Es en el curso de esa Fiscalización en la que Rodrigo Alejandro Ormeño Gómez amenazó a los supervisores forestales en términos de decirles textualmente "VOY A AVERIGUAR POR INTERMEDIO DE MI ABOGADO DONDE VIVEN Y LOS VOY A MATAR A USTEDES Y A SUS FAMILIAS" amenazas que con posterioridad el mismo imputado repitió en en contra de las mismas víctimas en dependencias de la cuarta comisaria de Carabineros, amenazas que resultan ser, por lo demás, serias y verosímiles." (sic)

En concepto de la Fiscalía los hechos descritos como número uno, configuran tres delitos de robo con violencia previstos y sancionados en el artículo 436 inciso primero en relación con los artículos 432 y 439 del Código Penal, y los hechos señalados como número dos, configuran los delitos de sustracción de madera tipo hurto simple del artículo 448 septies en relación con el artículo 446 número 2 del Código Penal y el delito de amenazas simples del artículo 296 número 3 del Código Penal.

El Ministerio Público atribuye al acusado Rodrigo Alejandro Ormeño Gómez participación en los tres delitos de robo con violencia, el delito de sustracción de madera tipo hurto simple y el delito de amenazas, de acuerdo con lo que dispone el artículo 15 número uno del Código Penal, por haber tomado parte en la ejecución de todos los hechos de manera inmediata y directa, encontrándose los delitos consumados. Señala que a los acusados Freddy Jonathan Riquelme Cuevas y César Atricio Garcés Ríos les corresponde participación en el delito de sustracción de madera tipo hurto simple, ya que tomaron parte en la ejecución de los hechos de manera inmediata y directa, encontrándose el delito consumado.

En concepto del Ministerio Público a los acusados Rodrigo Alejandro Ormeño Gómez y César Atricio Garcés Ríos no les benefician ni perjudican circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Indica que a Freddy Jonathan Riquelme Cuevas le beneficia la circunstancia atenuante de responsabilidad criminal del artículo 11 número 6 del Código Penal.

La Fiscalía requiere se imponga a Rodrigo Alejandro Ormeño Gómez la pena veinte (20) años de presidio mayor en su grado máximo, las penas accesorias del artículo 28 del Código Penal y las costas como autor de tres delitos de robo con violencia; la pena de tres (3) años de presidio menor en su grado medio y multa de noventa unidades tributarias mensuales, comiso de los camiones incautados, las penas accesorias del artículo 28 del Código Penal y las costas como autor del delito de sustracción de madera modalidad hurto simple y la pena de cuatrocientos (400) días de presidio menor en su grado máximo, las penas accesorias del artículo 28 del Código Penal y las costas como autor del delito de amenazas.

Requiere se imponga a los acusados César Atricio Garcés Ríos, la pena de tres años de presidio menor en su grado medio y multa de noventa unidades tributarias mensuales, comiso de los camiones incautados y a Freddy Jonathan Riquelme Cuevas la pena quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio y multa de noventa unidades tributarias mensuales, comiso de los camiones incautados; más las penas accesorias del artículo 28 del Código Penal y las costas como autores del delito de sustracción de madera modalidad hurto simple.

Por su parte, el **querellante Forestal Arauco** dedujo acusación en contra de los acusados en virtud de los siguientes hechos:

“La madrugada del 04 de octubre del 2022, los acusados Jonathan Freddy Riquelme Cuevas, Cesar Patricio Garcés Ríos y Rodrigo Alejandro Ormeño Gómez, previamente concertados y provistos de vehículos motorizados al efecto, hicieron ingreso al predio forestal denominado San José de Colico, que se encuentra a la altura del kilómetro uno de la ruta 254 que conecta la ruta 160 con la localidad de San José

de Córico de la comuna de Curanilahue, y una vez que se encontraban al interior del referido predio forestal los acusados sacaron y sustrajeron madera consistente en pino insigne, en términos de que cargaron los camiones que tenían destinados al efecto, así el camión marca Volvo placa patente BFRX-30 y el camión marca Volvo placa patente DPRV-39 fueron cargados con una cantidad total de 23 metros cúbicos con un avalúo total de \$1.500.000, para luego salir del predio y llevarse para sí esta madera sin la voluntad de su dueño Forestal Arauco S.A. A continuación, los camiones que conducidos por Cesar Patricio Garcés Ríos y Fredy Jonathan Riquelme Cuevas toman la ruta 160 hacia el Sur con destino o dirección de Curanilahue siendo escoltados en todo momento por el Jeep placa patente CSZH-58 conducido por Rodrigo Alejandro Ormeño Gómez. Los supervisores forestales Daniel González Rubio y Jorge Navarrete Vera, que observaron el hecho, comunicaron esta situación a Carabineros de la Cuarta Comisaria de Curanilahue los que dentro de la misma comuna de Curanilahue a la altura del cruce del sector Villa Alegre de la Ruta 160 controlaron a los referidos vehículos con sus conductores, deteniéndolos. Es en el curso de esa Fiscalización en la que Rodrigo Alejandro Ormeño Gómez amenazó a los supervisores forestales en términos de decirles textualmente “VOY A AVERIGUAR POR INTERMEDIO DE MI ABOGADO DONDE VIVEN Y LOS VOY A MATAR A USTEDES Y A SUS FAMILIAS” amenazas que con posterioridad el mismo imputado repitió en contra de las mismas víctimas en dependencias de la cuarta comisaria de Carabineros, amenazas que resultan ser, por lo demás, serias y verosímiles.” (sic)

A juicio del querellante Forestal Arauco, los hechos descritos configuran el delito de sustracción de madera del tipo robo con intimidación del artículo 448 septies en relación con los artículos 432, 436 y 439, todos del Código Penal.

El querellante atribuye a los acusados Ormeño, Riquelme y Garcés, participación en el delito en calidad de autores del artículo 15 N°1 del Código Penal por haber tomado parte en la ejecución del hecho de una manera inmediata y directa, ejecutando cada uno acciones constitutivas del delito ya señalado, indicando que se encuentra en grado de consumado. Señala que a los acusados Ormeño, Riquelme y Garcés no les favorece ninguna circunstancia atenuante. Estima que al acusado Ormeño Gómez le perjudica la circunstancia agravante de la reincidencia genérica del artículo 12 N°15 del Código Penal. Indica que a los tres acusados les perjudica la agravante de responsabilidad penal del artículo 449 bis del Código Penal, por haber cometido el delito formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas.

Solicita al Tribunal imponga al acusado Ormeño la pena de veinte años de presidio mayor en su grado máximo, las penas accesorias del artículo 28 del Código

Penal y las costas como autor de un delito de sustracción de madera en su modalidad de robo con intimidación, más la multa de 100 Unidades Tributarias Mensuales y la pena de comiso de los camiones incautados. Requiere que a los acusados Riquelme y Garcés se les imponga la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio cada uno, las penas accesorias del artículo 28 del Código Penal y las costas de la causa, como autores de un delito de sustracción de madera en su modalidad de robo con intimidación, más una multa de 70 Unidades Tributarias Mensuales y la pena de comiso de los camiones incautados.

El **querellante Delegación Presidencial Regional del Biobío** dedujo acusación en contra de los acusados en base a los siguientes hechos:

Hecho 1: “El día 31 de enero del año 2021 aproximadamente a las 02:00 horas, el acusado RODRIGO ALEJANDRO ORMEÑO GÓMEZ, portando un arma de fuego corta llegó, acompañado de un grupo de sujetos, todos encapuchados, con chalecos antibala y con armas de fuego cortas y largas disparando al aire, hasta el predio Rural denominado Fundo Chilcoco, sector Agua Pié, ubicado en el Kilómetro 02, de la Ruta P-344, Comuna de Arauco, lugar donde se emplazan distintas viviendas, en específico los domicilios de las víctimas José Miguel Antileo Martínez; Claudia Álvarez Torres, Marcela Antileo Álvarez, Luis Esteban Antileo Álvarez, Miguel Antileo Álvarez y Juana Yolanda Fernández fuentes.

En un primer momento Rodrigo Ormeño Gómez junto a los otros sujetos aún no identificados rompen la puerta de acceso del domicilio de Luis Esteban Antileo Álvarez, quien se encontraba junto a su cónyuge Juana Fernández Fuentes y su hijo menor de dos años, una vez dentro golpean con pies y puños y con escopetas en el cuerpo y la cabeza al dueño de casa, lo lanzan al suelo, registran la casa, y luego de 20 minutos aproximadamente se retiran sacándole y llevando la suma de tres millones de pesos en efectivo mas una camioneta marca Ford Ranger, color azul, patente FCPC-94, una camioneta Mazda, BT 50, color blanco, patente JZVD-78 y su teléfono móvil marca Samsung. A la dueña de casa, doña Juana Fernández Fuentes, le sustraen la suma de dos millones trescientos mil pesos y su teléfono móvil marca Samsung.

Luego de cometido este hecho, el mismo Rodrigo Alejandro Ormeño Gómez, acompañado de los otros sujetos entraron a la casa habitación de Miguel Simón Antileo Álvarez, a quien golpearon en la cara, tiraron al suelo y le sustrajeron la suma de cinco millones de pesos y una camioneta marca Toyota, Hilux, patente FPRP-70.

Posteriormente, continuando con los delitos, ingresaron violentamente a la casa de don José Miguel Antileo Martínez y doña Claudia Carolina Álvarez Torres, quienes, al sentir disparos en las afueras de su casa, observaron cuando el acusado

Rodrigo Alejandro Ormeño Gómez y los otros autores entraron momentos antes a la casa de su hijo Miguel Simón Antileo Álvarez. En eso sintieron un fuerte golpe en la puerta de la casa observando que entraron siete personas aproximadamente diciendo que eran de la PDI quienes los amarraron de pies y manos con tiras plásticas, golpearon en la cabeza a don José Miguel Antileo Martínez y luego tomaron, se llevaron y sustrajeron la suma de 45 millones de pesos de don José Miguel Antileo Martínez, una camioneta Toyota, Hilux, año 2020 doble cabina, color rojo, y un rifle marca Winchester que el mismo Rodrigo Ormeño Gómez le había regalado a la víctima días antes por un negocio de venta de madera que habían realizado. A doña Claudia Álvarez Torres le sustrajeron dinero de su propiedad en una suma de tres millones quinientos mil pesos.

Luego salieron de la casa, disparando al aire y llevándose el dinero de las víctimas y las camionetas señaladas. Las víctimas todas resultaron con lesiones de carácter leve constatadas en el Hospital San Vicente de Arauco". (sic)

Hecho 2: "La madrugada del 04 de octubre del 2022, los acusados Jonathan Freddy Riquelme Cuevas, Cesar Patricio Garcés Ríos y Rodrigo Alejandro Ormeño Gómez, previamente concertados y provistos de vehículos motorizados al efecto, hicieron ingreso al predio forestal denominado San José de Cólico, que se encuentra a la altura del kilómetro 01 de la ruta 254 que conecta la ruta 160 con la localidad de San José de Cólico de la comuna de Curanilahue, y una vez que se encontraban al interior del referido predio forestal los acusados sacaron y sustrajeron madera consistente en pino insigne, cargando los camiones que tenían destinados al efecto, así el camión marca Volvo placa patente BFRX-30 y el camión marca Volvo placa patente DPRV-39 fueron cargados con una cantidad total de 23 metros cúbicos con un avalúo total de \$1.500.000 cada uno, para luego sustraerla, saliendo del predio y apropiándose de las trozas y troncos de madera sin la voluntad de su dueño, Forestal Arauco S.A.

A continuación, los camiones que eran conducidos por don Cesar Patricio Garcés Ríos y don Fredy Jonathan Riquelme Cuevas, toman la ruta 160 hacia el Sur con destino o dirección a Curanilahue siendo escoltados en todo momento por el Jeep placa patente CSZH58 conducido por Rodrigo Alejandro Ormeño Gómez. Los supervisores forestales don Daniel González Rubio y don Jorge Navarrete Vera, observaron y presenciaron el hecho, comunicando esta situación a Carabineros de la Cuarta Comisaria de Curanilahue los que dentro de la misma comuna de Curanilahue, a la altura del cruce del sector Villa Alegre de la Ruta 160, controlaron a los referidos vehículos con sus conductores, quienes no justificaron su adquisición o legítima tenencia, procediendo a su detención.

En el curso de esa Fiscalización don Rodrigo Alejandro Ormeño Gómez amenazó a los supervisores forestales señalando textualmente "VOY A AVERIGUAR POR INTERMEDIO DE MI ABOGADO DONDE VIVEN Y LOS VOY A MATAR A USTEDES Y A SUS FAMILIAS" amenazas que con posterioridad el mismo imputado repitió en contra de las mismas víctimas en dependencias de la cuarta comisaria de Carabineros, amenazas que resultan ser, por lo demás, serias y verosímiles, dadas las circunstancias en que se dan." (sic)

A juicio del querellante Delegación Presidencial Regional del Biobío, el hecho 1 configura el delito de robo con violencia o intimidación previsto y sancionado en el artículo 436 inciso 1° en relación con los artículos 432, 436 y 439 del Código Penal. En cuanto al hecho 2, señala que la conducta de don Rodrigo Alejandro Ormeño Gómez admite ser subsumida en el delito de sustracción de madera previsto y sancionado en el artículo 448 septies en relación con el 446 número 2 del Código Penal y el delito de amenazas simples del artículo 296 número 3 del Código Penal. Sin perjuicio de la responsabilidad de don Cesar Patricio (sic) Garcés Ríos y de don Fredy Jonathan Riquelme Cuevas como coautores del delito de sustracción de madera mencionado precedentemente, indica que su conducta también podrá ser subsumida por el Tribunal en el tipo previsto, sin perjuicio de subsumir la conducta de estos últimos en el tipo penal descrito y sancionado en el artículo 448 octies del Código Penal.

Señala que al acusado Rodrigo Alejandro Ormeño Gómez le corresponde participación en los tres delitos de robo con violencia, el delito de sustracción de madera tipo hurto simple y el delito de amenazas, de acuerdo con lo que dispone el artículo 15 número uno del Código Penal, ya que tomó parte en la ejecución de todos los hechos de manera inmediata y directa, sea impidiendo o procurando impedir que se evite, encontrándose los delitos en grado de desarrollo consumados, sin perjuicio de la participación señalada en el artículo 15 número 3 "presenciar sin tomar parte inmediata en él", teniendo en consideración que hubo la debida concertación entre los copartícipes, aceptando los resultados de los mismos.

Indica que a los acusados Freddy Jonathan Riquelme Cuevas y César Atricio Garcés Ríos les corresponde participación en calidad de autores del delito de sustracción de madera del artículo 448 septies del Código Penal o por aplicación del artículo 448 octies del Código Penal, ya que tomaron parte en la ejecución de los hechos de manera inmediata y directa.

En cuanto al grado de desarrollo, señala que todos los delitos se encuentran consumados.

Estima que no concurren circunstancias atenuantes de responsabilidad penal respecto de ninguno de los acusados y considera que concurre respecto de los tres

imputados la agravante del artículo 449 bis del Código Penal, en relación con el delito de sustracción de madera.

Solicita se imponga al acusado Rodrigo Alejandro Ormeño Gómez: por el delito de robo con violencia la pena de presidio perpetuo. Por el delito de sustracción de madera modalidad hurto simple y considerando la cuantía que excede de 40 UTM y la concurrencia de la agravante del artículo 449 bis del Código Penal, pide se establezca la pena de tres (3) años de presidio menor en su grado medio y multa de noventa unidades tributarias mensuales, comiso de los camiones incautados, las penas accesorias del artículo 28 del Código Penal y las costas. Por el delito de amenazas, la pena de quinientos (540) días de presidio menor en su grado máximo, las penas accesorias del artículo 28 del Código Penal y las costas. Respecto del acusado César Atricio Garcés Ríos, por el delito de sustracción de madera modalidad hurto simple, pide la pena de tres (3) años de presidio menor en su grado medio y multa de noventa unidades tributarias mensuales, comiso de los camiones incautados, más las penas accesorias del artículo 28 del Código Penal y las costas. Por último, requiere se imponga al acusado Freddy Jonathan Riquelme Cuevas por el delito de sustracción de madera modalidad hurto simple, la pena de tres (3) años de presidio menor en su grado medio y multa de noventa unidades tributarias mensuales, comiso de los camiones incautados, más las penas accesorias del artículo 28 del Código Penal y las costas.

TERCERO: Alegatos. El **Ministerio Público** en sus alegatos de apertura releva la circunstancia de que ambos hechos vengan en una sola acusación y contemplen a un actor principal en ambos, don Rodrigo Alejandro Ormeño Gómez. Anuncia que las víctimas del primer hecho, -robos con violencia-, declararán todos los antecedentes que orientarán al tribunal respecto de los hechos que ocurrieron en enero de 2021. Que esas circunstancias también quedarán plasmadas a través de las mismas declaraciones, toda vez que esta causa dice, se inició en la Fiscalía local de Arauco y fue archivada por un pseudo desistimiento de las víctimas. Expone que traerá a las víctimas para que expliquen lo anterior y todo lo que dice relación con la investigación que será corroborada por las policías. Respecto del segundo hecho, indica que traerá las pruebas relativas al lugar de la sustracción, la naturaleza de las especies sustraídas, la conducta desplegada por el imputado no solo en la sustracción, sino que, para su aseguramiento, la participación que le cabe a los conductores de los camiones y luego el despliegue de amenazas que sirvieron para evitar en su momento una persecución penal. Señala que probablemente el debate se centrará en determinar si las amenazas fueron serias o verosímiles, pero los testigos demostrarán

que efectivamente las amenazas que vierte Ormeño siempre están revestidas de seriedad y verosimilitud.

El **querellante Forestal Arauco** en sus alegatos de apertura señala que le asiste la legítima pretensión que, al finalizar el juicio, el tribunal adquirirá, más allá de toda duda razonable, la convicción respecto de la forma en que los hechos ocurrieron. Indica que comparte el sustrato fáctico de la acusación del Ministerio Público, pero no la calificación jurídica. Sostiene que en este caso se trata de uno de los líderes de organizaciones criminales dedicadas de manera habitual a la sustracción de madera a empresas forestales que tienen sus predios en la provincia de Arauco. Dice que el hecho por el cual se presenta en juicio al señor Ormeño y a los conductores de los camiones, que él mismo administraba, contrataba, no era la primera vez que ocurría, que así lo dirán los testigos. Anuncia que acreditará que había un modus operandi. Que una vez dentro del predio San José de Córico, el señor Ormeño solo o acompañado, en un vehículo, servía de escolta para que camiones contratados por él, llevaran madera de Forestal Arauco a lugares de acopio ilegal y así evitar el control policial o fiscalización. Plantea que las conductas están íntimamente unidas, son las que describe el artículo 433 del Código Penal, -robo con intimidación-. Señala que la intimidación también puede tener lugar con posterioridad a la sustracción para favorecer su impunidad y aquí eso es lo que ocurre en la ruta. Está de acuerdo en que la madera había salido de la esfera de protección del predio, ya no estaba dentro del predio, pero cuando se produce la fiscalización de Carabineros, aún había oportunidad para impedir que este delito quedara totalmente agotado, es decir, se podía recuperar todavía la madera, que es lo que ocurrió. Señala que, en esas circunstancias, en la carretera, frente a los carabineros, los supervisores forestales de Forestal Arauco fueron amenazados de muerte por Ormeño, quien dirige esta organización criminal para procurarle impunidad, para que no se le fiscalice, para que testigos no denuncien o se retracten. Dice que las amenazas fueron verosímiles, creíbles y serias, al punto que después de haber proferido estas amenazas en la ruta a sus representados, las repite en la unidad policial. Estas amenazas pretendían favorecer a Ormeño -quien las comete- y también a Riquelme y a Garcés, que conducían los camiones con la madera sustraída del predio de Forestal Arauco. No podrán alegar de manera razonable desconocimiento del dominio ajeno, sabían el ilícito de su actuar, trabajan habitualmente con Ormeño, por lo que conocían perfectamente el ilícito de su actuar. Por eso entiende que no es la calificación jurídica que invoca el Ministerio Público, -sustracción de madera en base a hurto y amenazas-, sino que un robo con intimidación, es decir, sustracción de madera en base al tipo penal de robo con

intimidación, lo que fundamenta que pida una pena superior. Entiende que al final del juicio se logrará la convicción que pretende.

En sus alegatos de apertura, el **querellante Delegación Presidencial Regional del Biobío** sostiene que el juicio tratará sobre la violencia rural, trata sobre dos grupos de hechos que comparten el mismo autor y forma de comisión similar, el uso de la violencia o intimidación en distintas formas, con la misma finalidad, lograr la sustracción de la propiedad ajena. Que, si bien su intervención comienza con el delito de sustracción de madera en octubre de 2022, la Delegación Presidencial Regional del Biobío presentó acusación particular por los dos grupos de hechos distintos, los primeros relacionados con tres delitos de robo con violencia cometidos el 2021 y el otro robo de madera en octubre de 2022, en atención a los bienes jurídicos protegidos y por la vulneración a la seguridad pública que ellos implican por el contexto en que se cometen. Estima que el Ministerio Público acreditará estos dos grupos de hechos. Reproduce los hechos de su acusación signados con el número 1 e indica que las víctimas presenciales lograron reconocer a uno de los autores porque lo conocían, al acusado Ormeño. Reproduce los hechos de su acusación signados con el número 2. Considera que se acreditarán los tres robos con violencia, el delito de sustracción de madera tipo hurto simple del artículo 448 septies en relación con el artículo 446 N°2 del Código Penal respecto de los tres imputados y la agravante del artículo 449 bis del Código Penal y el delito de amenazas simples, solo respecto de Ormeño. Entiende que lo discutido será la participación de los acusados, principalmente en el primer hecho y quizás en el segundo, y la seriedad de las amenazas. Estima que con la prueba que se rendirá, atendido especialmente que las víctimas presenciales reconocen a los imputados, se podrá afirmar su participación en los hechos y la forma en que se ejecutaron y la planificación previa de los autores. Se refiere a la demás prueba que se incorporará. Entiende que al terminar el juicio quedarán acreditados más allá de toda duda razonable los delitos y participación que su parte ha atribuido, pidiendo las condenas respectivas.

La **defensa** en sus alegatos de apertura señala que lo que se podrá acreditar, que es lo que observa Carabineros, es que dos camiones iban por la autopista cargados con madera. Eso no lo cuestiona. Todo el resto son apuestas de Forestal Arauco. Señala que la causa estuvo archivada por la Fiscalía, que la víctima se había desistido, pero cuando Forestal Arauco presenta las querellas, se atribuye la sustracción de las maderas a trabajadores de Ormeño que los estaba escoltando supuestamente. Cuestiona que se afirme que él iba escoltando si es que al mismo tiempo se sostiene que es el líder de una banda peligrosa. Dice que la Fiscalía ha sido jurídicamente objetiva porque presenta acusación en el hecho 1 solo respecto de

Ormeño y en el hecho 2 englobó a Ormeño, pero como autor de hurto y amenazas, que es lo que correspondería si es que hubiese ocurrido. Las amenazas posteriores a la consumación son propias del robo calificado del 433 y cuando esas amenazas son dirigidas a la víctima para evitar que ella quite o recupere las especies. Dice que los trabajadores de Forestal Arauco no entregaron ningún antecedente para acreditar el robo, Forestal Arauco cree que es dueña de todos los árboles de la región, pero hay otros predios que se dedican a lo mismo. Señala que el robo con violencia o intimidación solo contempla la intimidación o violencia antes o durante la sustracción. Por lo anterior rebate la calificación jurídica del hecho 2 que hace Forestal Arauco. Dice que, si realmente existió el hecho 1, lo correcto es un robo en lugar habitado. Que según la Fiscalía el hecho 2 fue observado por trabajadores de la Forestal, pero si así fuese, los que estaban sustrayendo se hubiesen dado cuenta que eran observados y sin embargo no los atacaron en el predio. Le llama la atención que, siendo trabajadores de la Forestal, teniendo celulares, no exista una imagen para acreditar la sustracción. Se pregunta por qué no llamaron de inmediato a la policía. Dice que entre que descubren la sustracción y llaman a Cenco, transcurren cerca de 27 minutos, reprocha que no hayan llamado de inmediato a Carabineros. Según la defensa, los guardias no llamaron de inmediato porque la estrategia era sorprenderlos en la carretera, porque si los llamaban de inmediato Carabineros no los encontrarían, porque no sacaron la madera de ahí, la sacaron del predio del frente. Cuestiona que supuestamente en 27 minutos aproximadamente sus representados fueran al lugar y cargaran los camiones. Dice se necesitan grúas para cargar los camiones. No hay fotos de las grúas. Dice que lo más raro es que no llamaran de inmediato a Carabineros. En definitiva, sostiene que en el hecho 1 no participó Rodrigo Ormeño, que no escoltó ningún tipo de camión, solo les pagó a dos choferes del sector para que sacaran madera de su predio. Considera que los tres acusados debieran ser absueltos. Respecto del hecho 2 no hay delito ni participación y respecto del hecho 1, duda que el hecho haya existido pues no hubo flagrancia, no se recuperaron especies, no se acreditó como tenían el dinero en la casa y por qué la víctima cambia de versión.

El **Ministerio Público** en sus alegatos de clausura sostiene que la inmediación permitirá el análisis de la prueba producida. Indica que el delito de robo con violencia se encuentra acreditado más allá de toda duda razonable. Resalta la información de las víctimas que declararon, doña Juana Fernández, don Luis Antileo y don José Miguel Antileo y las declaraciones que prestan don Ramón Henríquez y don Gerardo Torres y las diligencias policiales que llevan adelante doña Javiera Miranda y don Tedinson Cárcamo. Que, con lo anterior, unido a las fotografías del sitio del suceso y a las fichas de atención de urgencia de todas las víctimas queda claramente establecido

de que hubo un ingreso forzoso, la rotura de las vías de acceso a los domicilios de Luis Antileo, de José Miguel Antileo y otros domicilios, en que se sustrajeron diversas especies, vinculadas a los propietarios de dichos domicilios. Dice que los testigos fueron contestes en señalar que en horas de la madrugada del 31 de enero de 2021 ingresan violentamente en distintos momentos en sus domicilios, que sufrieron golpes, los que les causaron lesiones y les sacaron especies. Que la testigo Juana Fernández se refiere a una cantidad de dinero determinada porque habría efectuado un retiro, Luis Antileo también menciona cierto dinero y José Miguel Antileo además de referir una cantidad de dinero, dice que le habrían sacado su camioneta Toyota, que reconoce en las fotografías, la que fue encontrada, -las de Luis Antileo desaparecieron- además de un rifle que le habrían obsequiado. El fiscal señala que el punto está en la participación que se le atribuye a don Rodrigo Ormeño. El fiscal hace hincapié en que la inmediatez es la madre de este proceso, que hay que atender a la percepción y convicción que se forma a través del relato de los testigos el juez. Que, en su momento, esta causa que estaba en la Fiscalía de Arauco fue archivada, pero que el fiscal que habla la rescató y verificó lo que había ocurrido, porque la conducta del imputado en un momento determinado comenzó a surgir nuevamente en la zona con motivo de la sustracción de la madera, por eso se engarza un delito con otro. Dice que los jueces pueden haberse percatado que Juana Fernández fue una víctima hostil y que en todo momento trató de no ratificar lo que reconoció una y otra vez, esto es, que conoció a Ormeño, que lo reconoció por su voz, características físicas, que se lo manifestó a la policía, que incluso hizo un reconocimiento, así lo dijeron las policías. Que esto fue corroborado por Luis Antileo, a quien el fiscal dice que le preguntó una y otra vez hasta que al final se venció y dijo que había sido Ormeño. Refieren donde vivía Ormeño, que había hecho negocios con su padre, que había comprado madera, que lo habían reconocido por su voz. Lo reconocieron clara y objetivamente, lo que pasa es que por temor o por otra circunstancia, estas víctimas rebajaron lo que habían sabido, porque le tienen miedo a Ormeño, así que trataron de bajar su perspectiva para desligarse de esta situación. Pero José Miguel Antileo fue mucho más claro, porque no se dio cuenta y nunca supo que en la audiencia estaba Ormeño y declaró libremente porque no sabía que estaba. Que, de haber sabido, cree que su declaración hubiese sido distinta. Dijo que el dinero que le pagó Ormeño se lo había sacado, su escopeta también, que Ormeño había sido porque toda la familia lo comentó y agrega que ese mismo día, a las once de la mañana, Ormeño había dado una vuelta en el lugar, andaba en su camioneta, no saludó a nadie y se fue. Eso es corroborado con las declaraciones de los funcionarios Javiera Miranda y Tedinson Cárcamo. Que Javiera Miranda habla que un testigo, Héctor Espinoza, le dice que

Ormeño después de ocurrido el hecho llama por teléfono y pregunta qué había ocurrido al señor Antileo. Que todo eso refleja acción conocida, lugar conocido, víctimas conocidas, conocimiento de especies. Todo eso corroborado además porque Ormeño declaró, tiene una voz característica, en cada instante hacía gestos o muecas, cuando hablaba, de cierta altura respecto del resto, demostrando su personalidad para enfrentar una situación. No existe otra deducción, sino que condenar a Ormeño por los delitos de robo con violencia que se le han atribuido. Otra cosa dice el fiscal, es si es un solo hecho que se desplegó en varias oportunidades o tres hechos independientes o distintos, lo que le corresponderá decidir al tribunal, indica. En cuanto al delito de sustracción de madera, señala que se contó con la declaración de Daniel González. Él dijo que días antes habían pesquisado que se estaba sustrayendo madera desde el sector de San José de Colico. Mario Lagos va al lugar, da el aviso que van saliendo los camiones con los imputados presentes, son controlados en la ruta 160 a la altura de la pasarela de Villa Alegre, que Rodrigo Ormeño se encuentra con Jorge Navarrete y Daniel González y los amenaza de muerte y luego libremente se va a la Cuarta Comisaría de Carabineros de Curanilahue y los vuelve a amenazar. Las amenazas son tan serias y verosímiles, que es capaz de doblar la voluntad de Carabineros en Curanilahue, tan serias y verosímiles que no tiene pudor en amenazar a Carabineros, en intervenir en la vía pública un control vehicular de Carabineros y luego irse a la Comisaría, porque él se dedica a la sustracción de madera, toda la vida se ha dedicado a eso. Tiene una sociedad con su hermana, pero el dueño es Ormeño, él compró madera en Merilupo, pero como chivo expiatorio para tener un punto de referencia y sustraer madera de otro lado, pero olvidó que la madera de Merilupo iba a tener el desgaste lógico por el paso del invierno y no se dio cuenta de las diferencias con la madera de San José de Colico. Ormeño fue ininterrumpidamente seguido. El fiscal se refiere a declaración de la perito María Carolina Rodríguez y a las fotos de los sitios del suceso, que dan cuenta de la madera de Merilupo versus las otras. El fiscal formula la siguiente pregunta: ¿Ormeño habría sido tan hostil amenazando y resguardado sus camiones si fuera madera de Merilupo cuyo valor comercial debe ser ínfimo? No, se responde. Dice que el 4 de octubre de 2022 Ormeño en conjunto con los otros dos imputados se pusieron de acuerdo, fueron contratados por Ormeño para sustraer madera del predio San José de Colico. Por lo anterior pide condena por la sustracción de madera y las amenazas.

El **querellante Forestal Arauco** en sus alegatos de clausura estima que después de la prueba rendida, se pueden acreditar más allá de toda duda razonable, los hechos de la acusación en lo que respecta al hecho 2 y la tipificación penal que su parte sostiene. Se refiere a los testigos que declararon sobre el hecho 2. Dice que de

la prueba se puede extraer que se descarta la teoría de la defensa en su alegato de apertura, en cuanto a que el 4 de octubre de 2022 Ormeño transportaba madera desde un predio de su propiedad. Que está acreditado que venía del predio San José de Colico. Que el tribunal escuchó a Mario Lagos que estuvo dentro del predio, en un punto fijo, que podía observar lo que estaba ocurriendo y avisar a sus compañeros. Que los testigos Lagos, Navarrete y González estuvieron contestes en que Forestal Arauco sí tiene otros medios para seguridad de sus predios -drones y aviones- pero funcionan de día por lógicas razones. Dice que hubo un exitoso operativo que da cuenta de los ilícitos que sufre Forestal Arauco y las demás empresas forestales de la zona. Que ya existía una investigación previa en predio San José de Colico. Que la perito fue muy clara, la madera incautada no tiene relación con la del predio Merilupo, que la única coartada que tenían Ormeño y los conductores se cae. Repasa la declaración del funcionario Robinson Araya. Que la perito dice que la madera incautada es más compatible con la de San José de Colico, se refiere al título de dominio que Forestal Arauco tiene sobre ese predio, que queda claro que la madera proviene de este predio. Sobre la tipificación de robo con intimidación que ha sostenido en su acusación, el abogado querellante señala que la intimidación que Ormeño lleva a cabo en la ruta, que no es primera vez que el señor Ormeño participa en un ilícito de este tipo o que escoltaba la madera, que no hay corroboración de que llevaba a su hijo a alguna parte. Que el delito se agota cuando la madera llega a la cancha de acopio. Por ende, el señor Ormeño va escoltando a sus camiones con el afán de prevenir un control policial o bien disuadir a través de la amenaza a quienes serán sus denunciantes, -porque él sabe que sus denunciantes son los funcionarios de Forestal Arauco-, son ellos a los que debe intimidar, para que no denuncien, el señor Ormeño vigila su madera ilícita. Le da custodia. Lo hace para lograr la impunidad. Cita una sentencia dictada por la Corte Suprema en causa Rol N°6653-2012 en apoyo de su tesis. Dice que lo que buscaba Ormeño es lograr la impunidad, por lo tanto, es aplicable el artículo 433 en relación con el artículo 436, ambos del Código Penal. Por eso dice, invoca el tipo penal sustracción de madera en base al tipo penal robo con intimidación. Dice que las amenazas fueron serias y creíbles, los dos supervisores forestales saben quién es su interlocutor, Carabineros estando al lado no actuó respecto de un acto que están ellos persiguiendo. Pide veredicto condenatorio.

En sus alegatos de clausura, el **querellante Delegación Presidencial Regional del Biobío** sostiene que en un principio dijo que el juicio se trataría sobre violencia rural. Ahora dice que el concepto correcto es un juicio sobre miedo como método para cometer determinados delitos y asegurar impunidad. Repasa la declaración de José Miguel Antileo. Que los testigos Navarrete, González y Araya

dijeron que Ormeño participó en varios procedimientos, que era una persona que generaba miedo, por eso aduce el abogado, no es de extrañar que José Miguel Antileo diga que no lo reconoció. Lo mismo respecto de la reticencia de Juana Fernández y Luis Antileo. Aun cuando declararon ante la policía y lo reconocieron, cuando vienen al juicio, niegan haberlo reconocido, incluso cuando se les lee su propia declaración, al punto que cuando el fiscal le pregunta a doña Juana Fernández cuántas personas fueron a verla para que no declarara, ella respondió que no lo recordaba, pero no lo negó. Se refiere a la forma en que según los funcionarios policiales Juana Fernández habría reconocido a Ormeño: su voz, contextura física y la frase “cabro chico” que antes le había escuchado. Repasa la declaración de los testigos Javiera Miranda y Tedinson Cárcamo. Respecto del hecho 2, se refiere a la declaración del testigo Mario Lagos, vuelve al miedo que infundiría Ormeño. Repite pasajes de las declaraciones de los testigos Navarrete, González y César Faúndez. En cuanto a la agravante del artículo 449 bis del Código Penal, señala que la agregó a la acusación por la forma de organización y en atención a que los conductores estaban contratados por Ormeño para la sustracción de madera. En cuanto a la tesis de la defensa, sostiene que con la declaración de la perito y de Araya ha quedado acreditado que la madera de los camiones tenía características muy distintas a la que tenía la madera del predio Merilupo. Estima que se han acreditado los delitos imputados y la participación de los acusados. Pide se condene a los imputados a las penas solicitadas conforme al mérito del proceso.

La **defensa de los tres acusados** en sus alegatos de clausura se refiere al principio de objetividad y señala que el fiscal debe investigar no solo lo que perjudique al imputado, sino que también lo que pueda comprobar su inocencia. Dice que le parece extraño que solo haya presentado la declaración de un policía, de Fuentealba, quien dice ser especialista en estudio de prueba documental, que dice que último plan de manejo de Merilupo era del 2014. Luego trae la declaración de Robinson Araya, quien dice que último plan de manejo era del 2022. El defensor plantea la siguiente pregunta: ¿entonces por qué el fiscal no lo incorporó? Que ahí se olvida del principio de objetividad. En relación con el hecho 1 y sobre el punto de si es un robo o tres robos, dice que la descripción típica que hace el artículo 436, es robo con violencia o intimidación en las personas, o sea es un tipo penal que tolera la pluralidad de víctimas y establece una pena. Alega que las amenazas deben ser serias o verosímiles, que no es lo mismo analizarlas el día en que ocurren en que pueden ser verosímiles, que analizarlas un año después. Que sea seria significa que sea expresada en términos que se puedan concretar. Verosímil, que se pueda llegar a la conclusión que en el tiempo sí se podría concretar. Esgrime que ninguno de los

supervisores recibió una amenaza posterior. Señala que a pesar de que el fiscal dice que Rodrigo Ormeño se ha dedicado toda su vida al robo de madera, Robinson Araya dice que nunca investigó a Rodrigo Ormeño, pese a todos los años que lleva. Respecto del hecho 1, el defensor sostiene que, si bien podría dudar hasta del hecho en sí, reconoce que hay evidencia para constatar el hecho. Pero alega que en lo tocante a la participación de Ormeño hay muchas contradicciones, muchas faltas a la lógica. Dice que fiscal trajo un testigo mitómano y alcohólico al parecer, Luis Antileo, que dice que a él le robaron cuatro o cinco millones de pesos y a Juana nada, que había bebido media botella de pisco, que a sus papás los amarraron y que a su papá le robaron 45 millones de pesos, sin embargo, en su casa no hay evidencia, fotos, de las amarras, que a su papá le robaron cinco escopetas, que se echaron a perder usándolas para cazar conejos, que no conoce a Rodrigo, después dice que había ido al domicilio a hacer negocios con su padre. En relación con la declaración que el fiscal le exhibió a la testigo Juana Fernández, el defensor alega que el fiscal no le pidió que reconociera su firma en esa declaración, no se acreditó que declaración fuera de ella. El defensor indica que el acusado Ormeño es gordo y bajo, y pese a ello, cuando le preguntó a José Miguel Antileo si dentro de los siete sujetos que vio había uno gordo, dijo altiro que no, su respuesta fue espontánea. Dice que Rodrigo Ormeño está siendo juzgado por dichos, no por evidencia. Que también hay duda respecto de la participación porque José Miguel Antileo dijo que tuvo varios compradores ese día. Respecto del hecho 2, el defensor afirma que Fuentealba no investigó bien. Ataca el hecho de que no haya encontrado un plan de manejo de año 2022, está en línea. Solo habla de un plan de manejo del año 2014 y de eucaliptus, que ahí se entiende lo tendencioso de la investigación, indica. Respecto de la sustracción en sí de la madera, entiende que el único elemento para decidir una condena respecto del hurto es la declaración de la perito. Reprocha que la perito haya encontrado un solo tocón y que haya ido a tres lugares distintos en un solo día. Que la perito dijo que ese tocón era de 2840, a diferencia de Araya que dijo que los tocones del camión eran de 40x60, o sea el tocón que encontró la perito era más delgado que la madera de los camiones. Que la perito no puede dar precisión que la madera de los camiones sea del predio San José de Colico. Que en cuanto a la madera que se ve derrumbada en Merilupo y que se ve más delgada, hace presente que quizás esa era la parte más delgada del árbol y se sacó la más gruesa, que es la que se comercializa. Cuestiona que Mario Lagos, diga que va por primera vez a un campo, bosque, -en un día nublado o con lluvia como dijo Navarrete-, pueda caminar en un bosque oscuro y no perderse. Cuestiona que Forestal Arauco, con su dotación tecnológica, no haya captado una imagen de la sustracción de madera. Que Navarrete sí dijo que había drones con visión nocturna.

Reprocha que Mario Lagos no haya llamado a Carabineros cuando llegó al lugar. En definitiva, pide absolución de sus representados. En el caso de Rodrigo Ormeño por falta de participación en el hecho 1, por ausencia del delito de hurto en hecho 2 y respecto de los acusados Freddy Riquelme Cuevas y César Garcés Ríos, por ausencia de delito y falta de participación, en subsidio, falta de participación dolosa, porque solo se acreditó que estaban manejando.

En su réplica, el **fiscal** dice que al momento de deducir la acusación el principio de objetividad se transforma en principio de responsabilidad de persecución penal. El fiscal dice que la documentación a la alude el defensor no indica cuál es la especie y que el Ministerio Público no la incorporó porque no servía para acreditar los hechos, es trabajo de la defensa. Además, al fiscal le llama la atención la ponderación del defensor en cuanto reprocha situaciones, argumentando el fiscal que el tribunal tiene que resolver conforme a la prueba rendida. En cuanto a la declaración que se le exhibió a la testigo Juana Fernández, el fiscal dice que se le mostró al defensor, se les mostraron todas las diligencias, si la defensa no acompañó sus pruebas no es responsabilidad del Ministerio Público. Defiende la veracidad de sus testigos y sostiene que lo que indica la defensa dista de lo ocurrido en juicio.

El querellante Forestal no ejerce su derecho a réplica.

El **querellante Delegación Presidencial Regional del Biobío** en su réplica señala que a don Tedinson Cárcamo se le exhibieron fotos de las amarras relativas al hecho 1. Que la declaración de Juana Fernández sí fue reconocida por ella. En cuanto a la afirmación de que don Luis Antileo era un alcohólico o estaba en estado de ebriedad, aduce que la testigo Javiera Miranda dijo que estaba en plenas condiciones y consciente al declarar.

Ejerciendo su derecho a réplica, la **defensa** sostiene que no ha señalado que la declaración que se le exhibió a Juana Fernández no exista, sí está en la carpeta, lo que cuestiona es el cumplimiento de los requisitos del ejercicio, que exige que la declaración sea reconocida por el testigo, no se concretó el ejercicio como corresponde para tener absoluta certeza de que ella lo dijo. Respecto del plan de manejo, el defensor señala que él no dijo la especie, por transparencia.

CUARTO: *Acusados Riquelme y Garcés guardan silencio y declaración del acusado Ormeño.* Que, al inicio de la audiencia, los acusados Riquelme Cuevas y Garcés Ríos, siendo debidamente informado de sus derechos y debidamente asesorados por su abogado defensor, hicieron uso de su derecho a guardar silencio y no declararon en estrados. Por su parte, el acusado Rodrigo Ormeño Gómez, habiendo sido también debidamente informado de sus derechos y en presencia de sus

abogados defensores, decidió renunciar a aquél que le permite guardar silencio, declarando sobre los hechos de la acusación.

El acusado Ormeño señala que se le acusa de varios delitos, pero dice que en el delito número 1 no tiene participación. Sobre el segundo, dice que ese día llamó a los trabajadores para que se juntaran en la Copec a echar petróleo para ir a cargar esa madera que está en un predio que está en Los Puentes, se llama Merilupo, ahí tenían pino. El día 3 de octubre se puso de acuerdo con las personas de los camiones, con las grúas y camiones más, eran cuatro camiones en total, de ir a sacar esa madera, se juntaron como a las ocho en la Copec a petrolear y se dirigieron al predio de destino que estaba en Los Puentes. Entre ocho y nueve fueron al predio, llegaron como a las diez, porque está como a una hora, por San José. Los camiones tienen que ser cargados con una grúa o con un auto carguío. El auto carguío demora como 50 minutos, una hora en cargar cada camión. Cuando los dos primeros camiones estaban ya cargados, alrededor de las doce de la noche, salieron del predio en dirección al aserradero, tienen que salir por San José, no por Colico. Colico queda hacia el otro lado de la carretera. Fueron hacia el aserradero. Él arrienda una casa en San José y pasaron por ahí y como él tenía que llevar a su hijo adonde su polola a Curanilahue se fue, pero se fue más atrás de los camiones, nunca fue escoltándolos. Dice que él llegó cuando los camiones estaban detenidos y él paró ahí porque los camiones eran de ellos, uno era de él y el otro del aserradero. Al consultar que sucedía ahí, le dijeron que los camiones tenían sus papeles atrasados, que los llevarían a un control y luego le devolverían los camiones y ahí lo controló a él el funcionario y como estaba sin lentes le pasó un parte por andar sin lentes. Como no tenía talonario, él tenía que ir a la Comisaría a buscar el parte y ahí esperar a los camioneros. En ningún momento a él lo llevaron detenido, él se fue solo a la Comisaría y esperó ahí como hasta las tres de la mañana cuando venían de vuelta con los choferes sin los camiones. En todo ese transcurso llamó a su casa y le fueron a dejar el plan de manejo y se lo pasó al teniente que estaba ahí, pero él no lo quiso leer y se lo pasó a otro funcionario, un sargento, él adoptó el procedimiento y vieron los papeles y dijeron que no, que el OS9 había dicho que ahí no había plan de manejo, que no existía plan de manejo, lo cual es mentira alega, señala que sí hay. Indica que había pino pese a que dicen que no había pino. Que sí autorizaron la ejecución de las faenas. Dice que tenía todos los papeles, que no quisieron verlos y después le dijeron que iba detenido por amenazas. Con respecto al hecho 1, dice que hizo negocios con el caballero, le compró madera, una vez conversaron.

Interrogado por el fiscal, responde que conoce a Antileo Martínez, le compró pino y eucaliptus, pero ahí él (el acusado) trabajaba con don Bernardo Vivallo, ahí

sacaron madera de Agua Pie, que es el fundo del caballero, dice que conoce el Fundo Agua Pie, sacó madera de ahí, hizo negocios una vez, el que hacia los negocios era don Bernardo. No conoce a Luis Antileo, le regaló un rifle a José Miguel Antileo Martínez, pero estaba malo, porque le compraron madera a otro familiar de él, uno tenía que pagar peaje por camión que pasaba por ahí, entonces le hizo ese regalo y podía pasar por ahí. Le cobraba el dueño del predio. El dueño del predio es el caballero, con él hizo negocios. Usaba un camino, para pasar por ahí había personas que le cobraban peaje, estaban armadas. Ese predio era de don Antileo, de don José Miguel, él tenía sus guardias, quería escopeta o lo que fuera para sus guardias. Dice que ha usado arma de fuego (el acusado). Ha salido a cazar conejos en el campo. Donde él vive es una zona rural. Sobre el segundo hecho, responde que estaba en Los Puentes, no se acuerda nombre del predio, Merilupo parece. Nació en Curanilahue, tiene 44 años, ha vivido toda su vida en Curanilahue. Dice que es transportista, es dueño de la empresa forestal Bequer, Aserradero Los Ríos es de su hermana. Él trabaja para su hermana, le hace fletes. Hace tres o cuatro años trabaja en su empresa (en la de él), desde el 2020, antes era comerciante, el 2021 sí trabajaba en madera. Tiene dos camiones. Es primera vez que le detienen sus camiones.

Interrogado por el querellante Forestal Arauco, responde que el día anterior al hecho 2 le habló al muchacho de la grúa y él llamó a los otros choferes. El acusado dice que llamó a Juan Arriagada que era el gruero, él llama a los demás choferes para cargar, no pueden llegar los choferes antes si no hay grúa. También coordinó a Raúl Altamirano, a Freddy y a Patricio. El día 3 se reunieron para petroleo en la Copec, como a las ocho de la tarde, él no estaba en esa reunión. Él estaba en San José en ese momento, en su casa, en San José de Colico y de ahí fue a Curanilahue y después pasó a la Copec porque tenía que pagar el petróleo de los camiones. Ahí vivía su pareja. San José de Colico es un sector de Curanilahue. Sus trabajadores se dirigieron a un predio que está en el sector de Arauco, sector Los Puentes y el predio se llama Merilupo. Entre predio Merilupo y San José de Colico, hay unos 50 minutos, una hora, por el camino rural. Dice que conoce el predio Merilupo, que conoce San José Colico, pero no el predio forestal San José de Colico que le menciona el querellante. La madera que pretendía extraer en Merilupo era pino. No sabe qué edad tenía el pino, pero estaba bueno para cosecharlo. Los contratos, tratos para explotar Merilupo, los hizo su hermana, ella compró las hectáreas de madera y los que cosecharon el bosque fueron Sergio Cruz, que también le ha trabajado a Arauco. La noche en que fueron fiscalizados los camiones, venían de Merilupo, la madera era de ahí. Era imposible que trajera madera de San José de Colico. Al momento de la

fiscalización en el camino, él venía en su vehículo con su hijo, conducía un Toyota FJ Cruiser, gris, patente CSZ. No se acuerda desde cuando tenía este vehículo. Él no lo compró, se lo vendieron a su hermana, pero el traspaso no estaba hecho. Como era un jeep podía ir al bosque. No sabe si tenía un sonido especial, pero suena un poco más fuerte de lo normal. Se percató que se estaba llevando a cabo la fiscalización de los camiones porque tenían a muchos vehículos detenidos. Había que parar, no había por donde pasar. Él también fue fiscalizado porque se bajó a preguntar qué pasaba con los camiones, porque eran los que les trabajaban a ellos. Sus camiones estaban a un lado, preguntó por qué estaban detenidos si las guías estaban bien y le dijeron que los papeles de circulación estaban atrasados, que por eso los iban a llevar detenidos y después los iban a soltar. El funcionario le pidió el carné y su licencia y como en la licencia salía con lentes y como andaba sin lentes, le sacó un parte por no andar con los lentes puestos. Como andaba sin talonario, le dijo que fuera a la Comisaría, fue a dejar a su hijo y después a la Comisaría a esperar el parte y los camiones. En ese lugar en que se llevaba a cabo la fiscalización estaban los dos camioneros y había una camioneta ploma con guardias, que trabajan para empresa Maxcon. Esta empresa Maxcon le presta servicios a Arauco. Son guardias forestales, no usan uniforme. No los ha visto con algún distintivo. Estaban en una camioneta ploma, que no traía un distintivo de la empresa Maxcon, un logo, baliza, marca. Sabe que eran de esa empresa porque antes habían detenido a sus camiones con Carabineros. Los mismos guardias de la camioneta ploma le dijeron a él: “te tenemos todo el aserradero droneado, sabemos hasta lo que comís” (sic). Conocía ese vehículo de color gris y sabía que era utilizado por personal de Maxcon. Al que manejaba la camioneta gris lo conocía, era flaco, la camioneta también. Esa noche del hecho 2 no tuvo contacto físico con los trabajadores de Maxcon, lo insultaron y él también los insultó, en la carretera, le sacaron la madre y él también. Querellante le consulta si expresó lo siguiente: “voy a averiguar por intermedio de mi abogado donde viven y los voy a matar a ustedes y a sus familias”. Responde que no, que no los amenazó, que como iba a decir eso si no tenía abogado. En la Comisaría no les dijo nada. Él preguntó en la Comisaría por qué le seguían los camiones.

Interrogado por el querellante Delegación Presidencial Regional del Biobío, responde que la madera que traían eran del predio Merilupo, una hectárea de Merilupo la compró Aserradero Los Ríos, esa empresa es de su hermana, él tiene una empresa de transporte. Su hermana se llama Angélica Ormeño. La madera la compró el 2022, se compra la madera no el predio. No sabe cuándo se plantó la madera, el predio no es de él, se cosecharon en mayo o junio, era pino. En la Fiscalía lo detuvo un sargento que era de Concepción, no lo conocía de antes, ese sargento estaba a cargo del

procedimiento. Se dedica al rubro de la madera, en enero de 2021 también, con la otra persona que trabajaba. Él le hacía el transporte y de repente compraba sus cargas de madera. En ese tiempo le compró madera a José Miguel Antileo, una vez se juntó con José Miguel Antileo en su Fundo Chilcoco, en Agua Pie. José Miguel Antileo tenía guardias armados. El acusado dice que tenían que pasar por su predio, el camino que está más cercano para salir es del caballero. El acusado dice que a él le dicen "Mentolato", a su papá le decían así. Heredó el apodo.

Preguntado por su defensa, responde en relación con el hecho 1 que están confundidos porque no tuvo participación en ese hecho. De las personas que viven en ese predio solo conoce al caballero, a don Miguel, que vende madera, sus predios tenían eucaliptus y pinos. Es grande, robusto, unos 60 años. Es como un huaso. No lo vio con cosas lujosas. Nunca lo vio en un vehículo, pero los cabros -los guardias- andaban en camioneta, doble cabina, en buen estado, los guardias recorrían el predio con escopeta. Sobre el hecho 2, dice que sabe algo de madera. Pino insigne y pino radiata son prácticamente lo mismo, el pino oregón es distinto, casi nadie vende de éste. Dice que para que el pino esté en estado de ser explotado debe ser de 12 metros para arriba y de grosor 50, 48 de diámetro, depende de la madera que pidan. Los árboles que transportó ese día con sus camiones eran de 50, 40 de diámetro, 4 metros 10 de largo. Un tronco así pesa unos 300 kilos, ese día cada camión cargaba unos 25 palos. Los fue a buscar a Merilupo, que queda en Los Puentes, sector forestal, cerca de Arauco. No sabe si colinda con Forestal Arauco. Dice que conoce San José de Colico, que son poblaciones de Curanilahue que están en la carretera. Entre San José de Colico y el lugar de donde sacó la madera hay 50 minutos, una hora. Alcanzaron a cargarse 3 camiones, porque la grúa se vino vacía, explica como la grúa carga el camión con madera. Esas grúas transitan como a 80 en carretera. Una grúa debiera llenar un camión en 45 minutos, una hora. Ese día demoraron unas dos horas en cargarse los camiones. Estaba la grúa y los tres camiones con sus tres choferes, cuatro personas. Forestal Arauco tiene guardias, tienen drones, tienen lo último en tecnología. La señal de celular es buena. Está la Comisaría de Arauco cerca. Su empresa forestal se llama Bequer, es de transporte y la de su hermana se llama Aserradero y Barraca Los Ríos, ella se llama Angélica Ormeño Gómez. Carabineros no le dijo que estaba siendo acusado por hurto de madera, los camiones estaban ahí por el permiso de circulación, por tener documentación vencida. Siempre ha estado el plan de manejo, le dijeron que no había plan de manejo, él dijo que tenía toda la documentación. Le mostró el plan de manejo a Carabineros, llamó a su hermana y ella le mandó a dejar el plan de manejo, ahí debería salir como empresa explotadora Aserradero y Barraca Los Ríos. Él muestra este plan de manejo y Carabineros le dice

que OS9 les había dicho que en ese predio de Merilupo no existía pino y él dijo que cómo era posible si tenía ejecución de corte, si la misma Conaf había autorizado el plan de manejo. Ese día contrata a personas para manejar, a Freddy y Atricio, era la primera vez que le hacía una vuelta Freddy. Identifica a los demás acusados como a los sujetos a los que ha llamado Freddy y Atricio. Indica que cuando hay vuelta les habla. Dice que “tener vuelta” es llevar madera de un destino a otro, negocios, a veces había que ir a buscar al predio y llevar al aserradero y en ese momento tenían madera en Merilupo -pinos-. A Atricio le había pedido otras veces. Si la vuelta es corta paga unos \$40.000, \$50.000. Esta vuelta era corta porque era de Merilupo al aserradero. No les alcanzó a pagar porque se fueron detenidos. Él le “saca la madre” (sic) a uno de los guardias, en el momento en que tienen detenido a los camiones, en la carretera, en Villa Esperanza. En ningún momento él es detenido ahí, se va solo a la Comisaría. Ahí se queda esperando a los choferes, después le dijeron que el plan de manejo no era válido y lo detuvieron y en Arauco le dijeron que estaba por amenazas. En la Comisaría no hubo discusión, dijo por qué siempre le seguían los camiones. Le dijeron que quedaba detenido por amenazas a los guardias, no por hurto de madera.

Antes de declararse cerrado el debate, se les ofreció la palabra a los acusados, haciendo uso de su derecho a expresar palabras finales los acusados Ormeño y Riquelme, no así el acusado Garcés.

El acusado Ormeño indicó que el funcionario que estaba de guardia ese día dice que las guías decían que los camiones llevaban eucaliptus, pero las guías decían pino, entonces nunca vio las guías y el plan de manejo se lo pasó en una carpeta a ellos mismos, él llamo para que lo trajeran. Había 2 planes de manejo, uno de Merilupo y otro de Caramávida. La guía dura 24 o 48 horas, ellos salieron el día 3 y de ahí pasaron como 4 o 5 horas, por eso la guía tiene fecha 3.

El acusado Riquelme dijo que su obligación como conductor es verificar que estén los documentos al día, es el único error que cometió al tomar el camión. Sobre las guías, dice que lo de las fechas no se exige, él ha trabajado en Forestal Arauco y por ejemplo él entra a un predio a cargar a las once de la noche en Curanilahue y a veces llega a la planta a Arauco a una de la mañana, dos de la mañana, le reciben la misma guía. En Forestal Arauco, por ejemplo, si él cargaba un producto que era pulpa, que es el despunte del árbol, a veces llegaba a la planta con una guía que decía 460 o 530 y le decían que abajo le cambiaban la guía. Siempre se ha trabajado así con el tema de las fechas de las guías.

QUINTO: Que según se desprende del auto de apertura, los intervinientes no acordaron convenciones probatorias.

SEXTO: *Prueba incorporada por el Ministerio Público y los querellantes.* Que, a fin de acreditar los hechos contenidos en la acusación fiscal y en las acusaciones particulares, así como la participación de los acusados en ellos, la Fiscalía y los querellantes incorporaron durante la audiencia de juicio oral, la siguiente prueba, que además fue compartida por la defensa de los acusados:

Prueba testimonial:

a) JUANA YOLANDA FERNÁNDEZ FUENTES, cédula de identidad N°18.106.511-7, dueña de casa, domicilio reservado.

b) LUIS ESTEBAN ANTILEO ÁLVAREZ, cédula nacional de identidad N°16.690.048-4, agricultor, con domicilio en Fundo Chilcoco S/N, sector Agua Pie, Arauco.

c) RAMÓN ANTONIO HENRÍQUEZ FIGUEROA, cédula de identidad N°16.701.361-9, cabo 1° de Carabineros, con domicilio en Cienfuegos 303 Arauco.

d) GERARDO ESTEBAN TORRES RAMÍREZ, cédula de identidad N°17.896.749-5, cabo 2° de Carabineros, domiciliado en predio Quillaitún 1521, Los Álamos.

e) TEDINSON HUMBERTO CÁRCAMO YÁÑEZ, cédula de identidad N°16.604.926-1, subcomisario de la Policía de Investigaciones de Chile, domiciliado en calle Michimalonco 939, San Pedro de la Paz.

f) CÉSAR RIGOBERTO FAÚNDEZ RIQUELME, cédula de identidad N°14.547.567-8, sargento 1° de Carabineros, con domicilio en Ramón Zamora S/N, Curanilahue.

g) FRANCISCO JAVIER FUENTEALBA FLORES, cédula de identidad N°12.305.445-8, suboficial de Carabineros de Chile de la Sección Encargo y Búsqueda de Vehículos Concepción, con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N°1303, Concepción.

h) MARIO ARTURO LAGOS CASTRO, cédula de identidad N°15.654.619-4, supervisor forestal, con domicilio laboral en calle Lastarria 1055, Concepción.

i) JORGE AGUSTÍN NAVARRETE VERA, cédula de identidad N°16.924.967-9, supervisor forestal, con domicilio en calle Lastarria 1055 Concepción.

j) DANIEL ISAAC GONZÁLEZ RUBIO, cédula de identidad N°18.020.821-6, supervisor forestal, con domicilio reservado.

k) JOSÉ MIGUEL ANTILEO MARTÍNEZ, cédula de identidad N°10.147.500-K, 65 años, agricultor, domiciliado en camino Agua Pie, Fundo Chilcoco, S/N, Arauco.

l) JAVIERA FERNANDA MIRANDA PALMA, cédula de identidad N°19.669.180-4, oficial de la Policía de Investigaciones, con domicilio en Granaderos N°2197, Calama.

m) **ROBINSON ALEXANDER ARAYA CERNA**, cédula de identidad N°16.329.448-6 subcomisario de la Policía de Investigaciones, con domicilio en Angol N°815, Concepción.

Prueba pericial:

MARÍA CAROLINA RODRÍGUEZ SALGADO, cédula de identidad N°12.917.812-4, perito en ecología y medioambiente de la Policía de Investigaciones Laboratorio Criminalística, ingeniera de ejecución forestal, con domicilio en Angol 861, Concepción.

Prueba documental:

a) Resolución Exenta N°123 de 2 de noviembre de 2021, del Servicio de Impuestos Internos.

b) Permiso de circulación de los camiones patente DTRV39 y BFRX30

c) Guías de despacho 1829 y 1830 de Aserradero y Barraca Los Ríos SpA.

d) Certificado de dominio vigente del camión BFRX.30-K.

e) Datos de atención de urgencia de Hospital San Vicente de Arauco número 23722599; 23722606; 23722600; 23722916; 23722677 y 23722610 correspondientes a las víctimas del hecho señalado como 1.

Otros medios de prueba:

a) Nueve fotografías informe policial OS9 número 465 de Carabineros de Chile de 4 de octubre de 2022.

b) Trece fotografías de los camiones patentes DTRV39 y BFRX30 en proceso de fiscalización y al momento de ésta.

c) Treinta y seis fotografías de la revisión y análisis de predio Merilupo.

d) Treinta fotografías del predio San José de Cólico y camiones patentes DTRV39 y BFRX30.

e) Una imagen satelital y nueve fotografías relacionadas con pericia medioambiental de LACRIM Concepción.

f) Cuarenta y dos fotografías del sitio del suceso correspondiente al Hecho N°1.

g) Cinco fotografías de hallazgo camioneta Toyota.

SÉPTIMO: Que el querellante Forestal Arauco incorporó la siguiente prueba propia:

Prueba documental:

a) Copia de inscripción de dominio que rola a fojas 1745 N°959 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Curanilahue del año 2015.

b) Certificado de avalúo fiscal primer semestre de 2024. Comuna: Curanilahue. Número de Rol de Avalúo: 005090-00002. Dirección o nombre del bien raíz: San José de Colico. Destino del bien raíz: forestal. Avalúo total: \$10.421.888.638.

OCTAVO: *Hechos acreditados.* Que habiendo ponderado la prueba rendida en juicio por los intervinientes con arreglo a la normativa contemplada en el artículo 297 del Código Procesal Penal, este Tribunal ha concluido que se acreditaron, más allá de toda duda razonable, los siguientes hechos:

Hecho número 1:

NOVENO: *Valoración de la prueba en relación con el hecho establecido como número 1.*

Que en lo que dice relación con el **hecho establecido como número 1**, éste resultó comprobado principalmente con las declaraciones de quienes figuran como víctimas de los eventos delictivos y con los testimonios de los funcionarios policiales que se entrevistaron con los afectados durante la etapa investigativa. Así, compareció al juicio doña Juana Yolanda Fernández Fuentes, quien declaró que en enero de 2021 fue asaltada. Señaló que siendo entre las dos y tres de la mañana, estaba en su casa y que llegaron unas personas encapuchadas, quienes preguntaban donde estaba la plata, indicando que en ese momento ella estaba con su pareja de este entonces, don Luis Esteban Antileo Álvarez y el hijo de ambos, de un año a esa fecha. Respecto del número de personas que conformaban el grupo que irrumpió en su hogar, la testigo afirmó que eran aproximadamente siete personas. En cuanto a lo que le sustrajeron a ella, dijo que habían sido tres millones de pesos, justificando que dicho monto correspondía a un retiro del 10% de fondos previsionales y a ahorros que ella efectuaba en base a dinero que le entregaba su pareja. Agregó que este último, don Luis Antileo Álvarez, fue golpeado por los asaltantes.

La deponente además aportó ciertos elementos relativos al lugar en el que se encontraba emplazada su casa, haciendo el alcance de que ella ya no residía ahí e indicando al tribunal que en ese predio había tres casas más alrededor, en las que vivían sus suegros, el hermano de su pareja y la hermana de éste de nombre Marcela, quien no estaba presente el día de los hechos. Sobre el sitio del suceso, Fernández reconoció fotografías que le exhibió el fiscal, en las que identificó su casa de ese entonces, la casa de doña Marcela y la de su ex cuñado de nombre Simón. En las fotografías de su casa de ese entonces, doña Juana Fernández identificó la entrada del inmueble y en el interior, el comedor y cocina de su casa. En dichas imágenes se aprecia un desorden asociado al registro de un inmueble propio de un asalto, pudiendo observarse que la puerta de la casa se encuentra dañada, lo que explicó la testigo, obedecía a que los malhechores habían “reventado la puerta”. En relación con la dinámica del asalto, afirmó que en un primer momento ella se encontraba en el comedor y que después los asaltantes la llevaron al dormitorio donde estaba su hijo.

Además, la testigo Fernández dio cuenta de haber prestado declaración ante funcionarios policiales.

Tal como afirmó doña Juana Fernández, resultó acreditado que ella prestó declaración ante la policía, pues el cabo 2° de Carabineros, Gerardo Esteban Torres Ramírez señaló en juicio haber participado en un procedimiento policial el 31 de enero de 2021, lo que permite fijar con precisión el día del asalto. En efecto, el funcionario Torres expuso al tribunal que en esa fecha y mientras se desempeñaba en la Primera Comisaría de Arauco, tomó conocimiento, alrededor de las 07:20 horas, de un procedimiento que decía relación con un robo ocurrido en el predio Chilcoco, sector Agua Pie, Arauco, aportando de esta manera el lugar preciso en que habría tenido lugar el hecho. Según los dichos de Torres en juicio, en el Servicio de Urgencia del Hospital de Arauco se encontraba una familia que había sido víctima de un robo, correspondiéndole a él dirigirse, junto con el cabo 1° Ramón Henríquez Figueroa, al establecimiento hospitalario para tomarle declaración a las víctimas.

Una vez en el Hospital, Torres constató que había alrededor de cinco miembros de esa familia, siendo labor del funcionario tomarle declaración en calidad de víctimas a cuatro de ellos y confeccionar el acta relacionada con las especies sustraídas, que consistían en distintos montos de dinero en efectivo y camionetas, entre otras especies. Respecto de las personas a las que le tomó declaración, el cabo Torres indicó que correspondieron a Luis Antileo Álvarez, Juana Fernández Fuentes, José Miguel Antileo y su cónyuge Claudia Álvarez, madre de Luis. Del relato de dichas víctimas, Torres obtuvo como información que el asalto había sido entre las 02:00 horas y 03:00 horas, coincidiendo así con el rango horario señalado por Fernández en juicio y pudiendo extraerse de la declaración de Torres, que el atraco no solo afectó el domicilio de doña Juana Fernández y Luis Antileo, sino que, a otras dos familias, cada una con su casa, en el mismo Fundo Chicoco, sector Agua Pie, pero que fue primero a la casa de Luis y Juana a la que se dirigieron los individuos. Reproduciendo los dichos de los afectados, el funcionario Torres señaló que sujetos desconocidos ingresaron a los hogares de las víctimas, golpeándolos, tirándolos al suelo, diciendo que eran funcionarios de la PDI y exigiendo la entrega de dinero y de todas las especies que tuvieran, siendo siete los sujetos que ejecutaron estas acciones.

De acuerdo con la declaración que obtuvo Torres del padre de Luis Antileo, esto es, don José Miguel Antileo, éste refirió que dos sujetos ingresaron a su casa, portaban armamento largo y pistola, que estaban encapuchados y que vestían chalecos antibalas, que lo amarraron, lo golpearon con golpes de pies y puños y como especies sustraídas reportó una camioneta, dinero en efectivo -43 millones de pesos- y un teléfono celular. De la declaración que el policía Torres le tomó a doña Claudia

Álvarez, se desprende que ella también fue amarrada durante el asalto. En cuanto a las otras especies que se llevaron los asaltantes, Torres afirmó que a Luis Antileo le sustrajeron alrededor de \$1.300.000 o \$1.500.000 y que a Juana Fernández le habían quitado una suma similar, además de un teléfono celular.

Por su parte, el cabo 1° de Carabineros Ramón Henríquez Figueroa, que de acuerdo con lo declarado por Torres lo acompañó al Hospital de Arauco el 31 de enero de 2021, entregó en juicio antecedentes coincidentes con los aportados por su colega y por la testigo Juana Fernández. El testigo Henríquez afirmó además que todas las víctimas del asalto habían resultado con lesiones leves. Se refirió también a la declaración que le tomó a José Miguel Antileo Martínez, quien le manifestó que mientras estaba en su domicilio con su grupo familiar, alrededor de las 02.30 horas, escuchó disparos afuera de su casa y después un fuerte golpe en la puerta, ingresando dos personas vestidas de negro con chaleco antibalas, con escopeta en las manos cada uno, apuntándolo a él y a su esposa en la cabeza. Indicó que lo botaron al suelo y les amarraron las manos, mientras los sujetos revisaban la casa. Tal como señaló el funcionario Torres, según Henríquez, a José Antileo le sustrajeron 43 millones más una camioneta, especificando el funcionario Henríquez que el vehículo era una Toyota Hilux.

La versión de Luis Esteban Antileo Álvarez respecto de los hechos ocurridos el 31 de enero de 2021 no solo fue introducida al juicio a través de Gerardo Torres, pues Antileo Álvarez compareció al juicio. Este último relató que el día de los hechos había llegado recién a su casa, estaba en su casa con su hijo y su pareja de ese entonces, Juana Fernández. Indicó que en momentos en que se disponía a acostarse, porque ya era tarde, escuchó disparos. Según se extrae de su declaración, lo que vino después fue el ingreso de sujetos a su domicilio, quienes le pegaron y se llevaron entre cuatro y cinco millones de su propiedad, además de dos camionetas, una blanca y una azul. Además, corroboró que no fue solo a él a quien le sustrajeron especies, pues afirmó que a su padre José Miguel Antileo Martínez le habían quitado una suma cercana a los 45 millones y a su hermano, una camioneta.

El subcomisario de la Policía de Investigaciones Tedinson Humberto Cárcamo Yáñez, en tanto, se refirió en juicio al sitio del suceso, Fundo Chilcoco S/N, sector Agua Pie de la comuna de Arauco, por haber concurrido a dicho lugar el 31 de enero de 2021 junto a su grupo investigativo, el que dijo, estaba compuesto por el inspector Bascuñán y la oficial Javiera Miranda. De los antecedentes relevantes aportados por Cárcamo, destaca la descripción del sitio del suceso como una zona rural, en la que se emplazaban a la fecha de su concurrencia cuatro inmuebles muy cercanos uno al otro, de material ligero y de un piso. Señaló que uno de ellos pertenecía a los padres de

familia y los otros tres a sus hijos y sus respectivos grupos familiares. Relacionando los dichos de Cárcamo con los demás testigos, es posible establecer que dichos padres de familia correspondían el 31 de enero de 2021 a José Miguel Antileo y Claudia Álvarez y que los otros tres domicilios correspondían a sus hijos Luis Antileo, Marcela y Simón respectivamente.

Cárcamo explicó al tribunal que el predio estaba ubicado en el Kilómetro 2 de la ruta P-344, de la comuna de Arauco, siendo respaldada su declaración a través de las fotografías que se le exhibieron del predio y de las casas allí emplazadas. Con el apoyo de imágenes captadas el 31 de enero de 2021, el funcionario Cárcamo indicó al tribunal que en la inspección del sitio del suceso se observó que todos los inmuebles mantenían sus vías de ingreso principales forzadas a la altura de la chapa, dando cuenta de haber sido vulneradas con algún objeto contundente, advirtiéndose en el interior de las casas de José Miguel Antileo, Simón y Luis, desorden atribuible a la búsqueda de objetos de valor, con lo que se puede asentar de manera definitiva el ingreso de los sujetos a los inmuebles, en los términos referidos por las víctimas. Además, con los dichos de Cárcamo se confirma el uso de armas de fuego por parte de los asaltantes, pues el subcomisario dio cuenta de haber encontrado en la propiedad evidencia balística consistente en 5 cartuchos de escopeta percutados, un cartucho de escopeta calibre 12 mm por percutar y una vainilla 9 milímetros.

La declaración de Cárcamo permite corroborar que los asaltantes amarraron al menos a José Miguel Antileo y a su señora Claudia Álvarez, tal como informaron ambas víctimas a los funcionarios, pues el subcomisario Cárcamo se refirió a amarras plásticas encontradas en uno de los inmuebles, las que fueron fijadas fotográficamente y reconocidas por el funcionario policial.

Además, el subcomisario Cárcamo reprodujo en juicio las declaraciones que le dieron las víctimas Luis Antileo y Juana Fernández, que resultan coincidentes con la dinámica de violencia que relataron al tribunal ambos testigos. Así, respecto de Luis Antileo, Cárcamo señaló que éste manifestó que estaban pernoctando en su domicilio, que producto de ruidos que escucha despierta, ve que su pareja no está junto a él y se percata de un sujeto de rostro cubierto por un pasamontaña y premunido de una escopeta, que lo tiran al piso, que es agredido con golpes de pies y de puño y que recibe golpes con la cacha de la escopeta en todo el cuerpo y que revisan todo.

En cuanto a doña Juana Fernández, en su declaración a Cárcamo le relata que estaba despierta a la hora de los hechos ya que quería ir al baño en ese momento y escucha ruidos de vehículos afuera, que ingresan de forma violenta a su inmueble siete sujetos, todos a rostro cubierto, usando guantes, diciendo que eran de la PDI,

que la toman del pelo, la hacen sentarse y que otros sujetos ingresan a la habitación donde estaba su pareja Luis, a quien agreden y tiran al piso.

Respecto de las especies sustraídas, Cárcamo señaló que a Juana Fernández le habrían sustraído una suma de 2 millones de pesos aproximadamente, suma que relacionada con la que indicó Fernández en juicio y aquella que reportó Torres, permite establecer que el monto que se le arrebató a Juana Fernández ascendió al menos a \$1.500.000. Coincidiendo con Torres, el funcionario Cárcamo señaló que, de acuerdo con lo informado por Fernández, los asaltantes también se habrían llevado un teléfono celular de su propiedad, siendo esas especies entonces las que ha tenido por acreditadas el tribunal respecto de Juana Fernández. Tratándose de Luis Antileo, el subcomisario Cárcamo señaló que lo que éste manifestó como sustraído correspondía a una suma cercana a los 2 millones de pesos, además de una camioneta Ford Ranger azul y una camioneta BT 50 de color blanco. En cuanto a don José Miguel Antileo, según el testigo Cárcamo a éste le habrían arrebatado la suma de 43 millones, una camioneta y un rifle Winchester.

Contribuyó también a comprobar la ocurrencia de los hechos del 31 de enero de 2021 la declaración de la oficial de la Policía de Investigaciones doña Javiera Fernanda Miranda Palma, quien afirmó haber concurrido al Fundo Chilcoco S/N, Agua Pie en Arauco, por un procedimiento de robo con violencia, coincidiendo así con el funcionario Cárcamo quien señaló que ella formaba parte de su equipo investigativo. Tal como surge de la prueba ya valorada, la testigo Miranda dio cuenta de que el sitio se trataba de un fundo familiar, donde vivían los padres en una casa y en las otras tres casas tres de los hijos. Señaló la testigo que en el lugar le tomó declaración a Luis Esteban Antileo Álvarez, obteniendo de dicho testimonio un desarrollo de los hechos coincidente al que ha extraído el tribunal de los demás testigos analizados. Así, según lo que Luis Antileo le manifestó, cerca de las 02:00 horas escuchó disparos, se levantó y vio que su esposa no estaba e inmediatamente ve entrar a unos sujetos encapuchados a su pieza, quienes lo golpean con golpes de pies y puños y con escopeta y lo tiran al suelo.

Respecto de las especies que Luis Antileo le dijo que le habían sido sustraídas, la testigo indicó que se trataba de 3 millones en efectivo, su camioneta Mazda BT 50, otra camioneta Ford Ranger y un teléfono celular Samsung, lo que permite comprobar dada la ratificación que ha existido en relación con dichos vehículos, que los malhechores efectivamente se llevaron esas camionetas. En cuanto al monto de dinero, considerando que ha existido cierta discrepancia en cuanto a la suma, se ha tenido por establecido que el dinero que se le arrebató a Luis Antileo desde su domicilio alcanzó por lo menos a \$1.500.000. Respecto del celular mencionado por la

funcionaria Miranda, no habiendo señalado otro testigo dicho objeto, incluso no habiéndolo declarado en juicio el propio Luis Antileo y no existiendo por lo tanto corroboración al respecto, no se ha dado por acreditada su sustracción.

De especial relevancia resultó la declaración de la oficial Miranda para corroborar lo reportado por Luis Antileo en juicio, esto es, que también había sido víctima del asalto el otro hijo de don José Miguel Antileo y hermano de Luis, don Miguel Simón Antileo Álvarez. La funcionaria Miranda señaló que en la declaración que le tomó a este último, que éste le contó que alrededor de las 02:30 horas estaba su casa y escucha unos vehículos llegar. Que abre la puerta y se percató que habían llegado dos furgones blancos, bajándose siete personas aproximadamente de cada uno, que quedó en shock, que vio que se dirigían a la casa de una de sus hermanas y que prácticamente espera a que ingresen a su casa, que lo golpean en ambos lados de la cara y que estuvieron alrededor de 10 minutos en su casa y que le sustrajeron 5 millones en efectivo y su camioneta Toyota Hilux. Considerando que el testigo Luis Antileo solo da cuenta que a su hermano le sustrajeron una camioneta, sin mencionar una suma determinada este testigo u otro distinto a Miranda, solo se ha dado por establecido que a Miguel Simón Antileo Álvarez le sustrajeron su camioneta Toyota Hilux. Además, si bien la funcionaria Miranda declaró que Miguel Simón Antileo refirió que antes de que ingresaran a su domicilio los sujetos se dirigieron a la casa de una de sus hermanas, entiende el tribunal que Simón Antileo lo que vio fue el ingreso a la casa de su “hermano”, pues no hay antecedente probatorio alguno que permita señalar que los asaltantes ingresaron a la casa de la hermana de Simón y Luis -doña Marcela- y tampoco las acusaciones así lo describen. Lo anterior permite asentar que primero fue el ingreso al domicilio de Luis Antileo y Juana Fernández y el segundo ingreso al domicilio de Miguel Simón Antileo.

En lo que a las víctimas se refiere, declaró también en juicio don José Miguel Antileo Martínez, quien dio cuenta del ingreso violento de siete sujetos encapuchados a su domicilio ubicado en Fundo Chilcoco, S/N, sector Agua Pie, Arauco y que compartía con su cónyuge, hoy fallecida indicó. En relación con lo anterior y teniendo presente que la mayoría de los testigos fija en siete el número de sujetos asaltantes, entiende el tribunal que el número de individuos al que hizo referencia la funcionaria Miranda corresponde a un error en el que incurrió.

Volviendo a la versión de José Miguel Antileo en juicio, éste afirmó que los sujetos le pegaron con una escopeta y que le sacaron 33 millones de pesos, una escopeta, un rifle y una camioneta. Si bien existe coincidencia entre lo declarado por otros testigos y José Miguel Antileo en cuanto a que se le sustrajo una suma de dinero, la suma que reporta Antileo Martínez es menor, de manera que es esa la que se ha

tenido por acreditada, por entender el tribunal que es él quien conoce mejor lo relativo a su patrimonio. En cuanto al rifle, habiéndolo reportado también el funcionario Cárcamo, se ha dado por establecida su preexistencia, pero no así respecto de la escopeta que refiere la víctima José Miguel Antileo, pues la misma no está contemplada en las acusaciones.

En cuanto a la camioneta, su sustracción no solo ha resultado acreditada conforme con la prueba testimonial ya analizada, sino que también por medio de las fotografías que se le exhibieron a Antileo Martínez en su declaración y en las que reconoció su camioneta Toyota Hilux color roja, la que, de acuerdo con dichas imágenes, logró ser recuperada pues a los asaltantes se les cayó por un lado del camino.

Por último, los Datos de Atención de Urgencia emitidos por el Hospital San Vicente de Arauco respecto de las víctimas José Miguel Antileo Martínez, Claudia Álvarez Torres, Luis Esteban Antileo Álvarez, Miguel Simón Antileo Álvarez y Juana Yolanda Fernández Fuentes, confirman las agresiones físicas que sufrieron mientras eran asaltados, pues así se consigna en los documentos respectivos y lo relatan en la anamnesis, constatándose lesiones leves en cada una de las víctimas, tales como contusiones y escoriaciones, las que resultan compatibles con las acciones denunciadas por los afectados y por lo mismo permiten corroborar la violencia ejercida sobre ellos en el contexto de las sustracciones de las que dieron cuenta.

DÉCIMO: *Participación acreditada.* Que en cuanto a la participación del acusado Rodrigo Alejandro Ormeño Gómez en los hechos ocurridos el 31 de enero de 2021, ésta resultó establecida a partir de las declaraciones de las mismas víctimas referidas en el considerando anterior, que transmitieron dicha información a los funcionarios policiales.

Respecto de Juana Fernández es necesario señalar que en lo relativo a la identificación del acusado y ante la alegación que hizo en juicio la testigo de no recordar algún tipo de reconocimiento, el fiscal hizo uso de la herramienta prevista en el artículo 332 del Código Procesal Penal. En ese contexto, Juana Fernández procedió a leer en voz alta una declaración previa prestada por ella ante la PDI. Dicha declaración reveló que ante la policía manifestó lo siguiente, en relación a la interacción que mantuvo con los asaltantes el día de los hechos: *“por lo anterior quisiera ver a mi hijo, entonces uno de los sujetos me golpeó en la espalda con una escopeta, por lo tanto el sujeto dijo llévala para dentro, luego me gritó no despertís (sic) a tu cabro chico, tápate la cara. No me estés mirando ajilada conchetumadre (sic) sino te voy a mandar un tiro en la cabeza. Al escuchar a ese sujeto hablar, su voz se me hizo familiar y al mirar su contextura que era baja estatura de cuerpo grueso y*

tenía una pistola en la mano de color negro a la cual le estaba poniendo el cargador, entonces reconocí de forma inmediata que correspondía a un sujeto apodado El Mentolato del sector de Curanilahue que había estado comprando madera a su suegro y a quien además había visto usar un arma igual”.

Incluso después de leer la declaración anterior y pese a todos los antecedentes que en ella se aportan, la testigo Fernández desconoció sus propios dichos, afirmando que ella no los había manifestado e insistiendo que ella no había visto al sujeto, pues los asaltantes hicieron que se tapara la cabeza. Sin embargo, no existe elemento alguno incorporado al juicio para entender que la declaración anterior que leyó Fernández no fue aportada por ella, como esbozó el defensor en sus alegatos de clausura, sino por el contrario, los testimonios de los funcionarios policiales durante el juicio demuestran que efectivamente Juana Fernández señaló, en las etapas previas al juicio, haber reconocido a uno de los sujetos. Antes de pasar a dichos testimonios, es necesario consignar que después de la lectura de su declaración anterior y pese a que la testigo Fernández mantuvo reticencia por aportar información sobre “El Mentolato”, el fiscal en su interrogatorio logró que la testigo reconociera que su pareja, esto es, Luis Antileo, había dicho que era El Mentolato, admitiendo Fernández que vio a este sujeto ir a la casa, hablar con su suegro -que como sabemos a esa fecha era José Miguel Antileo- y comprar madera.

Como se indicó previamente, a través de las declaraciones de los funcionarios policiales que comparecieron al juicio, se introdujo información aportada por Juana Fernández en la etapa investigativa sobre la identificación de uno de los asaltantes. Es así como el cabo 2° de Carabineros Gerardo Torres Ramírez, quien como ya se señaló le tomó declaración a Juana Fernández el 31 de enero de 2021 cuando acude al Hospital de Arauco, afirmó en juicio que Fernández manifestó haber reconocido a uno de los asaltantes por su voz, indicando que se trataba de El Mentolato, quien vivía en Curanilahue. Coincidiendo con el funcionario Torres, el cabo 1° Ramón Henríquez Figueroa, que como ya se estableció concurrió junto con Gerardo Torres al centro asistencial, declaró en juicio que este último le había informado que Juana Fernández había reconocido a uno de los autores del atraco, señalando Fernández que su apodo era El Mentolato y que vivía en Curanilahue.

Por su parte, el subcomisario Tedinson Cárcamo aportó en juicio antecedentes adicionales respecto a la identificación que habría hecho Juana Fernández de uno de los autores del asalto, permitiendo explicar la manera en que dicha víctima conocía la voz del sujeto. Señaló en juicio el funcionario policial, en base a la declaración de Fernández, que ésta había reconocido a uno de los sujetos, por su voz, refiriendo que sería El Mentolato, justificando dicho reconocimiento porque días anteriores al asalto,

El Mentolato habría estado en el fundo efectuando compra de madera a la familia, contexto en el que se habría producido una interacción entre Juana Fernández y el sujeto. Sobre dicha interacción y de acuerdo con la información que se obtuvo de Fernández según Cárcamo, El Mentolato le habría dicho a Juana sobre su hijo “*qué grande está tu cabro chico*”, mismas palabras o parecidas que le habría escuchado decir Fernández cuando ingresó a su domicilio junto a los otros individuos a cometer el atraco, cuando ella al querer ir al dormitorio de su hijo para ver cómo estaba, escucha que uno de los sujetos dice que la lleven a la habitación, diciéndole a ella: “*no despertís (sic) a tu cabro chico*”. En tal sentido si bien las expresiones reproducidas en ambas ocasiones son de uso coloquial y común, por lo que por sí mismas impiden vincularlas a una misma persona, lo cierto es que en el contexto en que se producen dan cuenta de que quien las emite es alguien que sabía de antemano que en dicho hogar había un niño, lo que se explica por la interacción que días antes Ormeño había tenido en el fundo con Fernández. Además, que, de acuerdo con el principio de inmediación, los jueces de mayoría pudieron advertir que efectivamente el acusado tiene una voz característica y particular, que la hace reconocible.

Pero los elementos a partir de los cuales Juana Fernández habría identificado a El Mentolato no se redujeron a su voz según lo declarado por Cárcamo, pues también lo habría reconocido por su baja estatura, por ser corpulento y por el arma que portaba al momento de cometer el delito. Sobre el arma, Juana Fernández le señaló que era una pistola de color negro y que ella vio cuando le estaba poniendo su cargador, constatando ella que era la misma pistola que portaba El Mentolato el día que hizo la compra de madera. En esa instancia, según lo que manifestó Juana a la policía, el sujeto habría exhibido la pistola al grupo familiar, efectuando un disparo, lo que fue percibido por Fernández como una forma de jactarse de su poder de fuego. En el mismo sentido, se debe enfatizar que la expresión “tápate la cara, no me estés mirando” reafirma el hecho que Juana Fernández debió haber visto, aunque sea de manera momentánea, al sujeto que le habló, permitiéndole apreciar su contextura física y observar que manipulaba una pistola. Además, Cárcamo dio cuenta de que Juana Fernández identificó certeramente a El Mentolato en un procedimiento de reconocimiento fotográfico como la persona que había comprado la madera y que había ingresado a su domicilio el 31 de enero de 2021.

Pero no solo Juana Fernández manifestó a los policías haber reconocido a uno de los asaltantes, sindicándolo como El Mentolato, sino que también su pareja a la fecha de los hechos, don Luis Antileo Álvarez. El testigo, en su declaración en juicio y en términos similares a Juana Fernández, intentó desligarse de cualquier identificación de alguno de los malhechores, afirmando primero que él no había visto a nadie y que

no había levantado la vista. Sin embargo, luego de que se le exhibiera su declaración previa ante la Policía de Investigaciones para refrescar memoria, admitió haber dicho que vio al primer sujeto que ingresó, cuyo apodo dijo era El Mentolato y su nombre Rodrigo, quien había hecho negocios con su padre, agregó. No obstante, intentó justificar la mención de dicho sujeto, afirmando que lo nombró porque todas las demás víctimas lo estaban diciendo, entre ellos su hermano y Juana y que él no había leído la declaración que dio al firmarla.

Tal como sucedió con Juana Fernández, las declaraciones de los funcionarios policiales e incluso del padre de Luis Antileo Álvarez, don José Miguel Antileo Martínez, demuestran que Antileo Álvarez sí reconoció a El Mentolato. En el caso del subcomisario Cárcamo, éste declaró en juicio que Luis Antileo también había reconocido a uno de los asaltantes por la voz, siendo El Mentolato, que sabía que se llamaba Rodrigo y que residía en San José de Colico. Además, y al igual que Juana Fernández, Luis Antileo señaló que en días previos al asalto dicho sujeto había estado comprando madera a la familia. A la declaración de Cárcamo debe agregarse la de la funcionaria Javiera Miranda Palma, quien señaló en juicio haber recibido el testimonio de don Luis Antileo. De acuerdo con lo expuesto por Miranda, Luis Antileo reconoció a uno de los sujetos por su voz, identificándolo como El Mentolato y señalando que su nombre era Rodrigo y que vivía en San José de Colico. Además, la funcionaria Miranda dio cuenta que dicho sujeto era conocido por toda la familia afectada por el asalto, pues habían hecho negocios con él.

Pero no solo quedó demostrado que Luis Antileo Álvarez sí reconoció a uno de los asaltantes el día de los hechos a través de las declaraciones de los policías que concurrieron al juicio, pues su propio padre, don José Miguel Antileo Martínez, confirmó lo anterior. En efecto, al deponer en juicio, Antileo Martínez señaló que su hijo Luis Antileo le había dicho que uno de los asaltantes había sido El Mentolato y que había reconocido la pistola que portaba el día de los hechos. Dicha forma de identificación debe relacionarse con la información que le aportó Juana Fernández al subcomisario Cárcamo, quien como ya se expuso, le dijo al funcionario que había reconocido que era El Mentolato, entre otras razones, por la pistola que le vio portar el día del asalto, la que era igual a la que le observó manejar a dicho sujeto en días anteriores.

Si bien don José Miguel Antileo indicó en juicio que él no vio que alguno de los siete sujetos que ingresaron a su domicilio el día del atraco tuviese las características físicas de El Mentolato, ello no significa que éste no haya ingresado, pues es sumamente factible que por el estado de conmoción en que se encontraba el testigo - de 62 años a la fecha de los hechos aproximadamente según se desprende de su

individualización-, no hubiese estado en condiciones de captar los rasgos físicos de los malhechores. Sin embargo, el testigo aportó antecedentes que otorgan corroboración adicional al reconocimiento que hicieron Luis Antileo y Juana Fernández. En efecto, don José Miguel Antileo refirió que le vendió a El Mentolato varias camionadas de madera, por un valor aproximado de \$400.000 cada una y que el sujeto le había pagado una semana antes de que ocurriera el asalto. Además, dio cuenta también del rifle que le había regalado El Mentolato. Pues bien, habiéndose acreditado que le fueron sustraídos un rifle y una alta suma de dinero a José Miguel Antileo, es dable inferir, que precisamente El Mentolato haya ingresado al domicilio de la víctima el 31 de enero de 2021, en conocimiento de la existencia de dichos bienes y precisamente en búsqueda de ellos. Otro indicio de participación de El Mentolato y que debe valorarse dice relación con que, según lo declarado por José Miguel Antileo en juicio, dicho individuo en horas previas al asalto había ido en su camioneta al fundo, a dar una vuelta, mirando, mencionó el testigo, y sin hablar con nadie. Tal conducta, unida a todo lo demás razonado, da cuenta de un estudio previo de un lugar, como el que hace un asaltante que se dispone a cometer el delito, revisando así los niveles de seguridad que posee el sitio y formas de acceso entre otros aspectos.

En cuanto a la identidad del sujeto apodado El Mentolato, ninguna duda cabe que el mismo corresponde al acusado Rodrigo Alejandro Ormeño Gómez. En efecto, el subcomisario de la Policía de Investigaciones Robinson Alexander Araya Cerna, quien declaró en juicio sobre un procedimiento policial distinto al que surgió de los hechos ocurridos el 31 de enero de 2021 pero relacionado también con el acusado Rodrigo Alejandro Ormeño Gómez, afirmó que el referido era conocido como El Mentolato, lo que además fue admitido por el propio acusado Ormeño cuando declaró en juicio. Sobre dicha declaración, cabe señalar que éste negó cualquier participación en los hechos ocurridos el 31 de enero de 2021. Sin embargo, reconoció que en el año 2021 le compró madera a don José Miguel Antileo, que se había juntado con él en el Fundo Chilcoco, en Agua Pie y que le había regalado un rifle, lo que concuerda con parte del testimonio de las víctimas.

Así las cosas, el tribunal ha adquirido la convicción de la participación del acusado Ormeño en los hechos ocurridos el 31 de enero de 2021, considerando el reconocimiento de Luis Antileo y Juana Fernández que fue reproducido válidamente en juicio por otros testigos, unido lo anterior a los demás indicios de participación ya anotados. Respecto de las razones por las cuales los testigos Juana Fernández y Luis Antileo no ratificaron en juicio en todas sus partes las declaraciones anteriores que vertieron y en que incriminaban al acusado, no es posible afirmar a ciencia cierta a qué obedeció dicha actitud. Sin embargo, resulta plausible que haya sido el miedo a

posibles represalias lo que los haya llevado a intentar desligarse de sus dichos anteriores, teniendo en especial consideración que según el funcionario Araya Cerna, Ormeño es un sujeto que infunde temor incluso a los propios carabineros de Curanilahue. Además, resultó decidora la respuesta que dio la testigo Juana Fernández cuando el fiscal, casi al finalizar su interrogatorio le consultó cuántas personas habían ido a hablar con ella para que no declarara y la testigo dijo no recordar la cantidad de personas, pero sin negar que dicha situación haya existido. Asimismo, a la conducta hostil, renuente y evasiva reflejada en las declaraciones en juicio de las víctimas Luis Antileo y Juana Fernández, se suma el hecho de que se tuvieron que decretar dos órdenes de detención ante la inasistencia de testigos, resultando solo una de ellas positiva, la decretada en contra de José Miguel Antileo, quien vino a reafirmar el contexto del hecho e identificación de Ormeño como autor del mismo, que Luis Antileo y Juana Fernández ya habían señalado a los funcionarios policiales.

Es importante igualmente mencionar que, en la zona debido a los innumerables hechos de violencia ocurridos, efectivamente resulta del todo muy difícil que las víctimas quieran participar en los juicios, por el temor al peligro que significa hacer sindicaciones respecto de la autoría en este tipo de delitos. Lo cual hace comprensible la conducta que finalmente adoptan las víctimas, como es en el presente caso.

UNDÉCIMO: *Calificación jurídica de los hechos acreditados y signados como número 1 y de la participación del acusado.* Que los hechos signados como número 1 que se han dado por acreditados importan para este tribunal, la calificación jurídica del delito de **robo con violencia**, en grado de ejecución consumado, previsto y sancionado en el **artículo 436 inciso 1°** del Código Penal en relación con los artículos 432 y 439 del mismo texto legal. En efecto, se ha comprobado que el acusado Ormeño Gómez, junto a otros sujetos, se apropió de especies muebles ajenas -dinero, vehículos, un rifle y un teléfono celular- valiéndose para ello de violencia, reduciendo a las víctimas a través de golpes, impidiendo así la resistencia y ocasionándoles lesiones leves.

En cuanto al ánimo de lucro que supone el tipo penal, éste se desprende de la naturaleza misma de las especies sustraídas, las cuales tienen un valor patrimonial susceptible de obtenerse a través de su comercialización.

En cuanto al grado de ejecución del delito antes referido, la valoración de la prueba rendida llevó a estos jueces al convencimiento de que la conducta tipificada por el legislador se ejecutó en este caso de manera completa y por lo tanto que se consumó, pues el acusado y los demás sujetos lograron huir con las especies en su poder.

Tal como se anunció en el veredicto dado a conocer a los intervinientes en la etapa procesal respectiva, el tribunal resolvió calificar los hechos como un solo delito de robo con violencia, no obstante haber sido tres los domicilios a los que ingresaron el acusado Ormeño y los demás sujetos. Para así decidirlo, se ha tenido en consideración que conforme a la descripción de las acusaciones y según se acreditó, el ingreso a los domicilios y la sustracción de especies que se hizo en ellos se realiza en una misma hora y que de acuerdo con las fotografías exhibidas al subcomisario Cárcamo y tal como éste lo describió, las casas afectadas se encontraban muy cercanas la una de la otra, en un mismo predio. Por lo anterior, si bien se trata de actos que podrían configurarse independientemente hechos típicos, dada la proximidad espacio-temporal antes constatada, constituyen una unidad delictiva y por lo mismo permiten al tribunal calificar los hechos como un solo delito de robo con violencia.

Que la participación del acusado Rodrigo Alejandro Ormeño Gómez fue estimada por el tribunal en calidad de autor del delito de robo con violencia que se dio por probado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código Penal, por haberse acreditado que fue parte un grupo de sujetos que ingresó a los domicilios de las víctimas, las agredieron y les sustrajeron especies, todos actos materiales directos e inmediatos.

DUODÉCIMO: *Valoración de la prueba en relación con el hecho establecido como número 2.*

a) En cuanto al **delito de sustracción de madera, tipo hurto simple**, los acusadores se valieron entre otras pruebas, de la declaración del supervisor forestal Mario Arturo Lagos Castro. El testigo indicó que trabajaba para la empresa Maxcon y que en esa función le correspondía supervisar predios de Forestal Arauco. Expuso que el 3 de octubre de 2022 efectuaba labores de patrullaje, recorriendo junto a un compañero de nombre Felipe la ruta 160. En esas circunstancias, afirmó que les dieron la indicación que debía dirigirse hasta un predio de nombre San José de Colico norte a verificar una sustracción de madera, predio que resultó acreditado conforme con la copia de inscripción respectiva incorporada al juicio, es de propiedad de Forestal Arauco S.A. y cuyo destino es el forestal, de acuerdo con el certificado de avalúo fiscal incorporado.

Siguiendo con la declaración de Lagos, éste expuso al tribunal que a aproximadamente a las 20:00 horas del día ya indicado, su compañero Felipe que manejaba el vehículo en que se trasladaban, lo dejó a la entrada del predio en cuestión y en conocimiento de las coordenadas del sitio específico donde se estaría llevando a cabo la sustracción. Explicó que se mantuvo escondido, hasta que después

de unas tres horas aproximadamente, divisó que entraron tres camiones, dos camiones sin acoplado y uno autocargante, siendo cargados los camiones con madera de pino y retirándose alrededor de las 00:50 horas los dos camiones cargados y quedando el autocargante dentro del predio. Indicó que los dos camiones que llevaban la madera eran de color blanco y que para salir del predio debían salir hacia San José de Colico y tomar la ruta 160.

Observado lo anterior, el testigo Lagos indicó que a través de un mensaje de WhatsApp le avisó a un compañero de nombre Harold que los dos camiones se estaban retirando del predio y él se mantuvo escondido hasta que sus otros compañeros lo fueron a buscar. Sobre el número de personas que él avistó cuando estaban los camiones en el lugar, señaló que vio a dos personas. Agregó el testigo que supo que con posterioridad los camiones fueron controlados en el peaje de San José de Colico. Respecto del camión autocargante, indicó al tribunal que no supo lo que pasó con éste, pues él se retiró del predio mientras dicho móvil permanecía en el sitio.

La declaración del supervisor Mario Lagos debe relacionarse con la del supervisor forestal Jorge Agustín Navarrete Vera, quien a través de su relato dio cuenta al tribunal de lo que vino con posterioridad al avistamiento que hace Lagos de los dos camiones cargando madera y luego retirándose del predio San José de Colico. Así, Navarrete expuso al tribunal que concurría a declarar por un procedimiento de sustracción de madera que afectó al predio San José de Colico ubicado en la comuna de Curanilahue, el 4 de octubre de 2022. Sobre dicho predio, el testigo indicó que, saliendo de éste, había una sola vía para tomar la ruta 160, que era la P-254, explicando que el ingreso estaba aproximadamente en el Kilómetro 1 de dicha ruta. Corroborando lo afirmado por Lagos, señaló que ese día había un colega de él al interior del predio, identificándolo como Mario Lagos, que avisó alrededor de las 00:50 horas, que en el predio había camiones Volvo de cabina blanca que estaban siendo cargados con madera de pino y que en horas más tarde salieron del lugar. El testigo Navarrete señaló que cuando recibió la información anterior se encontraba junto a su compañero Daniel González en el sector de La Colcha y que alrededor de las 01:15 horas efectúa un llamado a Carabineros para solicitar apoyo y ponerlos en conocimiento del ilícito.

Según Navarrete, después de unos minutos, se entrevistaron con los funcionarios de Carabineros que llegaron en el sector de la pasarela o paso nivel para vehículos que hay en el lugar y en esos momentos ve a los camiones pasando por la ruta 160 con dirección de norte a sur, los que coincidían con aquellos reportados por Lagos, pues eran de color blanco, marca Volvo sin carro y con carga de madera de pino insigne, los cuales estaban siendo escoltados por un jeep marca Toyota modelo

FJ Cruiser. Navarrete indicó al tribunal que, en esas circunstancias, le avisa a uno de los funcionarios de Carabineros que había llegado que esos eran los camiones que debían fiscalizar, iniciando Carabineros un seguimiento hasta el sector donde está la entrada de Villa Alegre, donde dijo también había carabineros dispuestos a realizar un control a esos camiones. El testigo explicó que sabía que esos eran los camiones que habían salido de San José de Colico, por la información reportada por Lagos, pero agregó además que existió otro punto de observación ubicado entre la pasarela de San José de Colico y el peaje de San José de Colico, que había confirmado que los camiones habían pasado y que eran escoltados por el jeep que mencionó, justificando el testigo su certeza para afirmar que eran esos camiones y no otros, pues dijo que en ese sector no había un retorno.

En cuanto al punto en que Carabineros logró detener la marcha de los camiones, Navarrete indicó que ello ocurrió aproximadamente en el Kilómetro 74 de la ruta 160, en dirección de norte a sur, en un sector llamado Villa Alegre, donde señaló que los funcionarios policiales procedieron a la fiscalización de los dos conductores. El testigo agregó que hasta ese sector llegó también el jeep FJ que se movilizaba detrás de los camiones y que era conducido, afirmó, por Rodrigo Ormeño, a quien ubicaba y reconoció en audiencia. Además, Navarrete aseveró que Ormeño intentó impedir la fiscalización haciendo alusión que la madera de los camiones no venía del predio San José de Colico. Agregó que Carabineros se percató que la documentación de los camiones estaba vencida, por lo que deciden trasladar los camiones al sector Los Álamos y le pidieron a él y a su compañero Daniel González que fueran hasta la Comisaría de Curanilahue, trasladándose entonces ambos hasta dicha unidad, donde hicieron la denuncia por sustracción de madera.

Como datos relevantes de la declaración de Navarrete es posible obtener además que la carga de madera que llevaban los camiones según él aseveró, correspondía a unos 24 metros cúbicos de pino en total entre los dos camiones, los que avaluó en una suma que va entre \$1.500.000 y \$2.000.000; metros cúbicos y valor comercial que, si bien es similar al indicado en las acusaciones del Ministerio Público y de la querellante Forestal Arauco, resulta algo más elevado, por lo que el tribunal se ha inclinado por las cifras indicadas en dichas acusaciones. Por otra parte, al testigo Navarrete se le exhibieron diversas fotografías, en las que es posible apreciar la madera incautada, que reconoció como pino insigne, cargada en los camiones y también se observan los dígitos de las patentes de los camiones marca Volvo, correspondiendo a las placas patentes BFRX-30 y DTRV-39.

El supervisor forestal Daniel Isaac González Rubio, quien fue mencionado por el testigo Navarrete, declaró también en juicio, confirmando la información aportada

por sus colegas Mario Lagos y Jorge Navarrete. Indicó que su empleador era la empresa Maxcon, la que a su vez le presta servicios a Forestal Arauco y dio cuenta que sus funciones consistían en fiscalizar que no hubiese daños en los predios, que las trancas estuviesen con sus candados, que no hubiese adulteraciones de candados, revisar las dimensiones de los predios, que no hubiese robos de madera. Sobre los hechos del 4 de octubre de 2022, señaló que había sido Mario Lagos quien había dado el aviso de que estaba ocurriendo una sustracción al interior del predio San José de Colico. González confirmó la forma en que se fue traspasando dicha información, indicando que Lagos dio la alerta a otro compañero de nombre Harold y que él les avisa a él y a Navarrete, quien llama a Carabineros. Además, la declaración de González permite asentar de manera definitiva que los dos camiones, -que el testigo describió de cabina blanca y marca Volvo-, fueron avistados en diversos puntos hasta su fiscalización, pues una vez que Lagos los ve salir le avisa a Harold. Este último, que estaba entre la pasarela de San José de Colico y el peaje, ve pasar los camiones sobrepasando el puente y en dirección hacia ruta 160 camino al sur, avisándoles a su vez a Navarrete y González que habían pasado por su punto, para posteriormente ser vistos por esos dos testigos cuando pasan por debajo de la pasarela, aproximadamente a las 01:20 horas, según indicó González.

Tal como su colega Navarrete, González señaló que cuando ven pasar los camiones, ellos ya estaban reunidos con Carabineros, por lo que les avisan que esos eran los camiones que habían sacado la madera del predio San José de Colico, siendo detenidos antes de llegar a Villa Alegre por la ruta 160 en dirección al sur. El testigo González corroboró además que los dos camiones estaban sin acoplado y que llevaban pino y que llegó al lugar don Rodrigo Ormeño en una Toyota FJ, a quien había visto pasar antes por la ruta de los predios. Señalo que ve descender a Ormeño de su vehículo, quien es fiscalizado por Carabineros. Coincidiendo con el testigo Navarrete, el supervisor González indicó que los funcionarios policiales les pidieron a ambos que los acompañaran a la Comisaría.

Por su parte, el sargento 1° de Carabineros César Rigoberto Faúndez Riquelme, se refirió al procedimiento policial que se originó a partir de los hechos relatados por los testigos Lagos, Navarrete y González. El funcionario policial declaró que el 4 de octubre estaba como suboficial de guardia en la Cuarta Comisaría de Curanilahue y que aproximadamente a las 01:00 horas, 01:30 horas, la Cenco Arauco le indicó a personal que se trasladara a sector La Mano, por la Ruta 160, con fin de interceptar dos vehículos que venían cargados con madera. Este comunicado, dijo Faúndez, había sido dado por supervisores de la empresa Arauco a Cenco. Ninguna

duda cabe a estas alturas y considerando los testimonios ya valorados, que los supervisores a los que aludió el policía corresponden a Navarrete y González.

Corroborando lo afirmado por los trabajadores de la empresa Maxcon, Faúndez declaró que minutos más tarde al comunicado, personal policial interceptó los dos camiones marca Volvo y que, al efectuar una revisión de su documentación, se percataron que ambos vehículos tenían el permiso de circulación vencido, lo que fue ratificado a través de los permisos de circulación de los camiones placas patentes BFRX-30 y DTRV-39, incorporados como prueba documental. El funcionario indicó que, con la finalidad de establecer la procedencia de la madera, los vehículos fueron trasladados a la Cuarta Comisaría de Fuerzas Especiales que se encuentra en Cerro Alto por las dimensiones de los móviles, mientras que los conductores fueron trasladados a la unidad para verificar la procedencia de la madera.

Relató que una vez en la unidad, los dos conductores exhibieron documentación de la madera que no coincidía con las cargas que llevaban, por lo que se tomó contacto con fiscal de turno que instruyó que personal especializado de Carabineros -OS9- cotejara la documentación que llevaban los conductores con la madera. Tal como lo indicó el testigo Navarrete, Faúndez afirmó que en la Comisaría los dos supervisores forestales hicieron la denuncia por la sustracción de la madera en el sector de Colico Norte, San José de Colico.

El sargento Faúndez se refirió también a la presencia de Rodrigo Ormeño en la unidad policial, indicando que había llegado a la Comisaría porque los camiones que habían sido controlados eran de su propiedad o estaban bajo su custodia. Dicha información resulta significativa pues permite establecer la vinculación de Ormeño con los camiones que fueron vistos por los supervisores forestales y que cargaban la madera, que conforme a la prueba rendida fue sacada desde el predio San José de Colico. Lo anterior se ve reafirmado con el mérito del certificado de inscripción y anotaciones vigentes del vehículo Volvo placa patente BFRX-30 que indica como su propietaria a Sociedad de Transporte Bequer SPA, que según reconoció el propio Ormeño durante su declaración, era de su propiedad. De ahí que tenga sentido lo denunciado por Navarrete y González en la Comisaría, según indicó Faúndez, esto es, que el vehículo que conducía Ormeño iba escoltando a los camiones, lo que revela la coordinación del acusado con los conductores de los camiones.

El suboficial de Carabineros de Chile Francisco Javier Fuentealba Flores dio cuenta al tribunal del análisis que a él le correspondió realizar como integrante del OS9 de Concepción, cuando el 4 de octubre de 2022 por instrucción fiscal realizó el estudio de dos guías de despacho electrónicas, la número 1829 y la número 1830, ambas de 3 de octubre de 2022 y que habían presentado dos imputados en un

procedimiento por el delito de sustracción de madera. Fuentealba dijo haber comprobado que ambas guías, que reconoció cuando le fueron exhibidas durante su declaración, correspondían a la empresa Aserradero y Barraca Los Ríos SpA y que no mantenían consignadas las coordenadas en grado decimal y tampoco el número de Resolución del Plan de Manejo que otorga Conaf. Afirmó que dichos antecedentes son obligatorios conforme a Resolución Exenta N°123 de 2 de noviembre de 2021 del Servicio de Impuestos Internos, lo que fue corroborado con la incorporación de dicha resolución en juicio. Agregó que de acuerdo con la información extraída de la página web de Conaf, el rol de avalúo que aparecía en los documentos mercantiles decía relación con el predio Merilupo de la comuna de Arauco y que quienes eran propietarias eran doña Cecilia Peña Pardo y doña Juana Peña Duval. Que dicho rol no mantenía una Resolución de Plan de Manejo para cosecha y explotación de madera de pino para año 2022 y que había mantenido una Resolución de Plan de Manejo de 5 de septiembre de 2014, pero para especie eucaliptus. Además, indicó que la guía 1829 mantenía consignado el nombre del conductor Freddy Riquelme y la 1830 el nombre del conductor César Garcés, con lo que resultó acreditado que la identidad de los conductores de los camiones fiscalizados por Carabineros el 4 de octubre de 2022 corresponde a dichos acusados, pudiendo constatarse lo anterior además en el contenido de las referidas guías de despacho.

Sin perjuicio de que la prueba valorada hasta ahora ha resultado suficiente para acreditar que la madera que llevaban los camiones conducidos por Riquelme y Garcés el 4 de octubre de 2022 fue sacada por ellos desde el predio San José de Colico, pues fueron observados en esa acción por el testigo Lagos, para luego ser avistados durante su trayecto por los demás supervisores forestales, hasta ser finalmente fiscalizados con la carga, lo cierto es que existe prueba adicional que permite reforzar dicha convicción. Nos referimos a las declaraciones de la perito María Carolina Rodríguez Salgado y del subcomisario de la Policía de Investigaciones Robinson Alexander Araya Cerna. La contribución probatoria de tales declarantes dice relación con la comparación de la madera incautada con aquella existente en el predio San José de Colico y con la que había en el predio Merilupo. En relación con dicho predio, se hace necesario consignar que precisamente la tesis de la defensa de los acusados consistió en sostener que la madera que transportaban los camiones provenía de ese predio y no de otro.

Al declarar en juicio, el acusado Rodrigo Ormeño aseguró que el 3 de octubre se había coordinado con Freddy Riquelme y César Garcés para que estos fuesen a sacar pino de Merilupo en los camiones que él puso a disposición de estos últimos. Sobre Merilupo, aseveró que su hermana Angélica Ormeño había comprado hectáreas

en dicho predio para explotar la madera y que existía plan de manejo que permitía la extracción de pino. Indicó que una vez que la madera fue cargada, los choferes se dirigieron a un aserradero, señalando Ormeño que él era dueño de la empresa forestal Bequer y que el Aserradero Los Ríos era de su hermana. Relató que cuando se dirigían al aserradero los camiones fueron fiscalizados por Carabineros y que, si bien él iba detrás de los camiones, no iba escoltándolos. Agregó que él se bajó a preguntar qué pasaba con los camiones, porque los camiones eran de él y del aserradero y que le dijeron que los permisos de circulación estaban vencidos. Insistió que le mostró un plan de manejo a Carabineros que lo autorizaba a transportar pino desde Merilupo.

Para desacreditar dichas alegaciones, los acusadores llamaron a estrados a la ingeniera de ejecución forestal y perito en ecología y medioambiente de la Policía de Investigaciones doña María Carolina Rodríguez Salgado. Expuso al tribunal que el 11 de noviembre de 2022 se constituyó en conjunto con oficiales policiales de la Brigada de Robo y con peritos de Laboratorio Criminalística de Concepción en 3 sectores distintos en la comuna de Arauco con fin de hacer una relación de los tipos de madera y de las trozas que había en estos lugares, sectores que graficó en una imagen satelital que ella misma confeccionó y que reconoció en juicio. El primer lugar correspondió al predio San José de Colico. Indicó que en el lugar se estaba realizando una faena de cosecha forestal de una plantación de aproximadamente 20 años, que esta plantación estaba siendo cosechada con maquinaria forestal tipo Harvester, describiendo que era una máquina que cosecha el árbol, le saca las ramas y deja un tronco con cicatrices en su corteza. Explicó que su peritaje consistía en un análisis de las características organolépticas que presenta la madera, que son las que se obtienen principalmente a través de la apreciación de los sentidos y que la forma de hacer esta caracterización de la madera es usando los sentidos: el tacto, el olfato, la textura de las trozas y que en base a eso realizó su informe. Respecto de las características de la madera en el predio San José de Colico, indicó que se apreciaban frescas, destacando una coloración de la madera que permitía inferir que esta cosecha estaba siendo realizada recientemente y que las trozas tenían diámetro entre 30 y 40 cms.

El segundo punto al que se dirigió correspondió al centro de operaciones especiales de Carabineros de Los Álamos, donde inspeccionó los camiones marca placas patentes DTRV39 y BFRX-30, que presentaban dijo, madera de pino radiata con características organolépticas que permitían inferir una data de corta reciente, pudiendo señalar que habían sido trozadas hace menos de 2 meses.

Finalmente, el tercer punto al que concurrió correspondió al sector de Merilupo, en Arauco. Indicó que en ese sector se había efectuado una faena de cosecha de la

misma especie -pino-, pero en el mes de marzo. Explicó que eso se logró constatar porque las trozas que continuaban acopiadas en ese predio presentaban una coloración diferente a las inspeccionadas en el predio San José de Colico y a las que mantenían los camiones incautados. Respecto del pino que había en Merilupo, indicó que tenía marcas visibles de ataques de hongos, lo que se debía a que las trozas habían estado en terreno desde marzo hasta fecha en que ellos fueron -noviembre-, y por lo tanto expuestas al invierno.

La perito concluyó, en base a sus análisis y respaldando sus conclusiones con fotografías de los dos predios inspeccionados y de la madera incautada que se le exhibieron en juicio, que la madera que estaba en los camiones no tenía ninguna relación con la madera que estaba en el predio Merilupo, estimando que ese predio había sido cosechado entre marzo y abril y que las características organolépticas tales como la textura, aroma y la coloración, eran distintas a las observadas en los camiones inspeccionados en el centro de operaciones de Carabineros en Los Álamos. En cambio, expuso que la madera de los camiones era mucho más compatible con la del predio San José de Colico. Además, en una de las fotografías que se le exhibió describió un tocón que se encontró en terreno en el predio San José de Colico que presentaba un patrón de corta distinto al que deja la cosechadora forestal de la empresa forestal, pues se apreciaban dos cortes, que eran los que deja comúnmente una motosierra, la que dijo, difícilmente puede realizar un corte uniforme a menos que sea un diámetro pequeño. Relacionado con lo anterior, y describiendo los troncos cargados en los camiones, estimó que ellos no habían sido cosechados por una cosechadora forestal como la que utiliza la empresa Forestal Arauco, sino que con una motosierra.

En términos coincidentes con la perito declaró el funcionario Araya, quien relató haber realizado labores en terreno en el predio Merilupo y en el predio San José de Colico. Expuso al tribunal que dichas diligencias arrojaron como resultado que la madera que fue fijada en los camiones no coincidía con la madera acopiada en Merilupo, sino que tenía más relación con la madera que se encontraba en el predio de San José de Colico.

Además, refirió haberle tomado declaración a la hermana de Rodrigo Ormeño, doña Angélica Ormeño Gómez, quien le señaló que en marzo o abril de 2022 adquirieron un predio de bosque en pie en el sector Merilupo, Los Puentes, comuna de Arauco a la familia Peña, lo que el funcionario confirmó con los vendedores. Indicó que Angélica Ormeño le exhibió un plan de manejo vigente a esa fecha, del año 2022. Si bien se advierte una discrepancia entre lo afirmado por este testigo y el funcionario Fuentealba, quien indicó que el predio Merilupo mantuvo como última resolución de

plan de manejo la de 5 de septiembre de 2014, lo anterior no altera lo que se ha venido concluyendo.

A diferencia de lo que alegó la defensa, carece de relevancia para efectos del establecimiento de los hechos si el predio Merilupo tenía o no plan de manejo vigente para la especie pino, que era la que cargaban los camiones. Aun cuando lo hubiese tenido, lo que en todo caso no consta porque se desconoce la especie a la cual se refería el plan de manejo de 2022 al que aludió Araya, dicha circunstancia no modifica el hecho comprobado de que la madera que fue encontrada en los camiones fue sacada desde el predio San José de Colico, pues así lo vio un testigo presencial, el supervisor Mario Lagos. Por lo demás y tal como concluyeron la perito Rodríguez y el subcomisario Araya, la madera de Merilupo no tenía las mismas características que la de los camiones incautados y es claro que ello se debe a que fue extraída desde el predio San José de Colico.

b) En cuanto al **delito de amenazas simples**, conforme a la prueba rendida y analizada precedentemente resultó acreditado que tanto los supervisores forestales Jorge Navarrete Vera y Daniel González Rubio como el acusado Rodrigo Ormeño arribaron a la Cuarta Comisaría de Carabineros de Curanilahue el 4 de octubre de 2022. En el caso de los dos primeros, porque en ese lugar denunciarían formalmente la sustracción de madera y tratándose de Ormeño, porque le interesaba saber qué pasaría con los camiones que habían sido fiscalizados y que como se ha asentado, él había puesto a disposición de Riquelme y Garcés. Pues bien, según declaró Navarrete, mientras esperaba junto a su compañero Daniel González en el exterior de la unidad policial que los atendieran, Ormeño comenzó a increparlos, afirmando Navarrete que el acusado lo amenazó a él y a su colega de muerte. De acuerdo con la versión de Jorge Navarrete, Ormeño les manifestó que con sus abogados conseguiría sus nombres y su dirección y que mataría a su familia, además de proferir improperios. Todo lo anterior, sin que existiera por parte de los supervisores ningún tipo de provocación, afirmó el testigo.

El supervisor forestal Daniel González confirmó lo expuesto por Navarrete, afirmando que en la Comisaría y aproximadamente a las 02:00 horas, Ormeño les dijo que con su abogado averiguaría donde vivían y que iba a visitar a sus padres, agregando que no sabían con quien se estaban metiendo. Cuando se le consultó al testigo González a qué se refería con la aseveración de que visitaría a sus padres, González dejó en claro que lo anterior le dio a entender a él que Ormeño podría hacerle daño a su familia, ya sea pegarle o matarla. Como puede advertirse, si bien González no reprodujo exactamente las mismas expresiones que según Navarrete Ormeño había manifestado, queda claro que las palabras que ambos escucharon del

acusado daban a entender que Rodrigo Ormeño les causaría un mal a ellos y a sus familias y desde ese punto de vista las versiones de los supervisores forestales resultan coincidentes.

Por su parte, el sargento 1° de Carabineros César Rigoberto Faúndez Riquelme, corroboró de manera periférica lo expuesto por ambas víctimas, pues tal como quedó asentado, él era el suboficial de guardia el 4 de octubre de 2022 en la Cuarta Comisaría de Curanilahue a la que llegaron los supervisores forestales y el acusado Ormeño. Según lo que declaró Faúndez, primero llegaron a la unidad policial los supervisores y unos minutos después Ormeño, a los que vio conversar en el frontis de la Comisaría. Si bien el funcionario policial declaró que no escuchó lo que decían, señaló que momentos más tarde ingresaron al recinto los dos supervisores denunciando las amenazas de Ormeño, y al reproducir el contenido de la denuncia, dijo que Ormeño les manifestó a las víctimas que a través de sus abogados conseguiría las direcciones de ambos supervisores y de sus familias para matarlos. De la versión de Faúndez se desprende que ambas víctimas dieron cuenta de las amenazas que habían sufrido usando los mismos términos, de manera que se ha tenido por acreditado que esas fueron las palabras empleadas por Ormeño. La denuncia de los supervisores indicó Faúndez, determinó que Ormeño fuese detenido por delito flagrante de amenazas.

A su turno, el subcomisario de la Policía de Investigaciones Robinson Araya ratificó la existencia de la denuncia por amenazas de muerte en la que figuraba como detenido Rodrigo Ormeño y como víctimas los supervisores forestales que habían denunciado el hurto de madera, denuncia de la que tomó conocimiento por haber recibido una instrucción particular para la respectiva investigación. Araya declaró que las amenazas se habían hecho en la Comisaría de Curanilahue y que el acusado Ormeño habría manifestado a uno de los denunciantes de la sustracción de madera: *“voy a averiguar donde vives y te voy a matar”*.

Si bien el funcionario dio a entender que había sido solo uno el destinatario de las amenazas, lo cierto es que el testimonio de Navarrete y González demuestra que fueron ambos y así también lo corrobora el sargento Faúndez quien, a diferencia de Araya, fue el que recibió la denuncia el mismo día de los hechos. La razón de esta falta de conocimiento acabado de los hechos relativos a las amenazas por parte de Araya entiende el tribunal, se debe a que como él mismo reconoció, no entrevistó a las víctimas de los hechos. Lo mismo puede explicar el resultado al que dijo haber llegado en su investigación respecto a este delito, al señalar que las amenazas no se pudieron comprobar porque ningún carabinero había visto o escuchado a Ormeño proferirlas, en circunstancias que la prueba rendida en juicio ha resultado suficiente para acreditar

tanto la ocurrencia de las amenazas como la autoría de las mismas, sin que sea óbice para arribar a tal conclusión el que un funcionario policial no las haya escuchado, considerando la corroboración que surge de las declaraciones de ambas víctimas, además de la prueba de contexto que significó la declaración de Faúndez.

En cuanto al requisito de seriedad que exige el tipo penal del artículo 296 N°3 del Código Penal, dicho elemento se extrae de las palabras empleadas por el acusado, que dan cuenta de un anuncio claro y preciso de daño no solo a los supervisores forestales, sino que también a sus familias, daño cuya concreción dependía del acusado.

El requisito de verosimilitud de las amenazas en tanto, que dice relación con la percepción de la víctima, en este caso surge en primer lugar de las circunstancias en que se efectuaron. En efecto, el acusado Ormeño amenazó a los supervisores forestales afuera de una Comisaría, lo que da cuenta de lo creíble que era para las víctimas que el acusado concretara el mal que anunciaba, considerando que era capaz de expresar las amenazas a solo pasos del lugar en que se encontraba la autoridad. A lo anterior debe agregarse lo declarado por Navarrete, quien afirmó que los funcionarios policiales en la ruta 160 se mostraron algo reticentes en adoptar el procedimiento cuando fiscalizaron los camiones y ante la llegada de Ormeño al lugar en que los vehículos fueron controlados, percibiendo Navarrete que los funcionarios le tenían miedo a Ormeño. Temor que también manifestaron sentir el propio Navarrete y González luego de haber sido amenazados por Ormeño. Para justificar lo anterior, Navarrete afirmó que ubicaba a Ormeño y que sabía que era una persona decidida, mientras que González dijo que le tenía miedo a Ormeño desde antes de los hechos por lo que comentaban sus colegas. Todo lo anterior tiene directa relación con los antecedentes aportados por Araya durante su declaración, quien como ya se mencionó anteriormente, señaló que Ormeño era bastante conocido en Curanilahue y que muchos carabineros le tenían temor por su manera violenta de actuar.

En cuanto a las amenazas que según las acusaciones habría proferido Ormeño durante la fiscalización de los camiones y antes de que éste y los supervisores forestales llegaran a la Comisaría, las mismas no resultaron acreditadas. En relación con lo anterior, el supervisor Jorge Navarrete afirmó que cuando se encontraba en Villa Alegre con el testigo González y en el curso de la fiscalización que llevaban a cabo los funcionarios policiales, expresamente Ormeño le habría dicho a él y a su compañero que los iba a matar, que eran unos perros culiaos (sic) y sapos. Sin embargo, no hubo otra prueba que permitiera corroborar con el estándar legal necesario dichas circunstancias. Solo el testigo Daniel González se refirió al respecto, pero dijo no recordar si había hablado con Ormeño en la ruta 160, que a él no lo había

amenazado ahí, sino que en la Comisaría y que sabía que había amenazado a Navarrete, pero no justificó de manera suficiente cómo lo sabía, pues admitió que no escuchó lo que le dijo Ormeño a Navarrete en el lugar de la fiscalización.

DÉCIMO TERCERO: *Calificación jurídica de los hechos acreditados y signados como número 2:* Que los hechos acreditados y signados como número 2 constituyen en primer lugar el **delito de sustracción de madera, tipo hurto simple**, en grado de ejecución consumado, previsto y sancionado en el artículo 448 septies del Código Penal, en relación con los artículos 432 y 446 N°2 del mismo cuerpo legal, toda vez que resultó establecido que los acusados Freddy Riquelme y César Garcés, previamente concertados con el encartado Rodrigo Ormeño, sustrajeron y se apropiaron de madera de propiedad de Forestal Arauco avaluada en \$1.500.000, sin emplear violencia, fuerza ni intimidación, la cual cargaron en camiones proporcionados por el acusado Ormeño para dicho efecto.

En cuanto al ánimo de lucro que supone el tipo penal, éste se desprende de la naturaleza misma de la madera sustraída, la cual tiene un valor patrimonial susceptible de obtenerse a través de su comercialización.

En cuanto al grado de ejecución del delito antes referido, éste resultó consumado, pues los conductores de los camiones lograron salir del predio San José de Colico con la madera ya cargada.

En segundo lugar, los hechos establecidos y designados como número 2 configuran, además, respecto del acusado Rodrigo Ormeño Gómez, el **delito de amenazas simples**, en grado de ejecución consumado, contemplado en el artículo 296 N°3 del Código Penal, toda vez que se encuentra acreditado que el acusado llevó a cabo el comportamiento típico y antijurídico consistente en amenazar a dos supervisores forestales con causarles un mal a ellos y a sus familias, anunciándole a las víctimas su intención de inferirle un daño, en forma seria y verosímil. En cuanto a no ser condicionales las amenazas, ello se desprende del hecho que el acusado no exigió a través de su conminación verbal, alguna condición de parte de las víctimas.

DÉCIMO CUARTO: *Participación.* Que la participación de los acusados Riquelme y Garcés en el delito de sustracción de madera, tipo hurto simple fue estimada por el tribunal en calidad de autores, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código Penal, participación que resultó establecida con el mérito de la misma prueba antes referida y considerando que tomaron parte en la ejecución del hecho de una manera directa e inmediata pues fueron ellos quienes ingresaron al predio San José de Colico y cargaron los camiones con madera. Se descarta de esta manera la petición subsidiaria efectuada por la defensa de los acusados Riquelme y Garcés, en orden a imputarles los hechos a título culposos, pues el haber ingresado a

un predio de propiedad ajena a sacar madera demuestra el conocimiento y la voluntad propia del dolo.

En cuanto al acusado Rodrigo Ormeño, su participación en el delito de sustracción de madera, tipo hurto simple se ha estimado en calidad de autor del artículo 15 N°3 del Código Penal. En efecto, si bien no se logró establecer que él ingresara al predio San José de Colico a sacar la madera, resultó acreditado que él se coordinó o concertó con los conductores Riquelme y Garcés para que fueran a sacar madera desde el predio San José de Colico, pues así fluye del hecho de haberle proporcionado los medios para cargar la madera sustraída, esto es, los dos camiones Volvo y la circunstancia de escoltarlos una vez que salieron del predio afectado, pendiente en todo momento de lo que sucedía con los camiones, al punto que se bajó de su vehículo cuando iban a ser controlados por carabineros, alegando que la madera no provenía del predio San José de Colico, sino que de Merilupo, lo que quedó descartado.

Cabe señalar que aun cuando en las acusaciones se le atribuyó autoría del artículo 15 N°1 del Código Penal al acusado Ormeño en el delito de sustracción de madera, corresponde al tribunal la calificación jurídica, debiendo siempre respetar el contenido fáctico de la acusación y en este caso las descripciones de los hechos contenidas en las acusaciones permiten la atribución de autoría conforme al artículo 15 N°3 del Código Penal, de manera que se ha respetado el principio de congruencia que debe existir entre acusación y sentencia.

Por último y en lo que dice relación con el delito de amenazas simples, la participación del acusado Ormeño fue estimada por el tribunal en calidad de autor, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código Penal, participación que resultó establecida con el mérito de la misma prueba antes referida y, en particular por la incriminación de las víctimas.

DÉCIMO QUINTO: *Rechaza calificación jurídica sostenida por el querellante Forestal Arauco.* Que el tribunal ha descartado la calificación jurídica pretendida por el querellante Forestal Arauco, conforme a la cual las amenazas proferidas por Ormeño a los supervisores forestales buscaban favorecer su impunidad y por lo mismo estarían íntimamente ligadas a la sustracción, configurándose el delito de sustracción de madera del tipo robo con intimidación del artículo 448 septies en relación con los artículos 432, 436 y 439, todos del Código Penal. Según se desprende de los alegatos de apertura de este querellante y de su discurso de cierre, la intimidación en este caso habría ocurrido con posterioridad a la sustracción, en la ruta, admitiendo que, si bien la madera ya había salido de la esfera de resguardo del propietario, lo que habría hecho

Ormeño es amenazar a los supervisores en la carretera, para procurarse impunidad, para no ser fiscalizado, para que los testigos no denunciaran o se retractaran.

Corresponde ahora señalar que la doctrina nacional está conteste en que la violencia o intimidación posterior a la sustracción en el delito de robo, -que es la que postula la querellante-, debe ejercerse de manera inmediata. Lo anterior se justifica pues solo de esa manera se verifica la relación funcional que debe existir entre la intimidación en este caso, y la sustracción, es decir, solo así es posible afirmar que la intimidación como medio de comisión se empleó para conseguir o facilitar la apropiación. De lo contrario no hay forma de diferenciar el delito de robo de un concurso de delitos. *“En todo caso, para que esta figura de hurto asimilada al robo con violencia o intimidación pueda ser castigada conforme a este último título, es necesario que los medios coercitivos destinados a consolidar la apropiación o favorecer la impunidad se empleen en forma inmediata.”* (GUILLERMO OLIVER CALDERÓN, “Delitos contra la propiedad”, LegalPublishing, 2013, pág. 294).

Aplicado lo antes expuesto al caso de autos, no puede afirmarse que haya existido la inmediatez a la que se ha hecho referencia, teniendo en consideración que tal como ya se indicó, las amenazas que supuestamente habría proferido Ormeño en la ruta 160 no fueron acreditadas, sino que únicamente las que emitió en las afueras de la Comisaria de Curanilahue. Para ese entonces los camiones con la madera ya habían sido trasladados por los funcionarios policiales al predio de Carabineros ubicado en Cerro Alto, de manera que no cabe más que concluir que las amenazas comprobadas, desde el punto de vista jurídico, estuvieron desligadas del acto de apropiación.

Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que el artículo 439 del Código Penal - tipo penal invocado por la querellante en su acusación- no alude al empleo de violencia o intimidación con posterioridad a la sustracción, sino que solo se refiere a dichos medios de comisión antes del apoderamiento o durante su ejecución, siendo el robo calificado (artículo 433 del Código Penal) el que dice *“después de cometido para favorecer su impunidad...”*.

DÉCIMO SEXTO: *Desestima concurrencia de agravante artículo 449 bis del Código Penal.* Que, si bien de la prueba rendida en juicio resulta claro que, en el caso del delito de sustracción de madera, tipo hurto simple, participaron los tres acusados previamente concertados y en calidad de autores, ello no resulta suficiente a juicio de estos sentenciadores para tener por configurada la agravante del artículo 449 bis de Código Penal.

Dicha disposición establece como motivo de agravación de los delitos que menciona el hecho de que el imputado haya actuado formando parte de una

agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer dichos hechos punibles, siempre que ésta o aquella no constituyere una asociación ilícita de que trata el Párrafo 10 del Título VI del mismo Libro. Como lo ha sostenido este tribunal en ocasiones anteriores, para que se justifique el aumento de pena que la norma indica, no basta con que hayan actuado dos o más personas en el hecho ilícito en calidad de autores, pues de ser así, hubiese bastado con que el legislador hubiese indicado expresamente que la coparticipación punible hace aplicable la agravante y en cambio, habla de agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer los hechos ilícitos, lo que da cuenta al menos, de un grupo de personas con cierta estructura, si bien no necesariamente jerarquizada, sí con cierta planificación, coordinación y permanencia en el tiempo, que no llegue al nivel de una asociación ilícita.

Expuesto lo anterior, debe señalarse que los querellantes no acreditaron los supuestos de hecho que exige el artículo 449 bis del Código Penal, al no haber aportado antecedentes objetivos que permitiesen afirmar el funcionamiento u organización de Riquelme, Garcés y Ormeño como una agrupación delictiva, por ejemplo, la comisión de ilícitos anteriores que hubiese dado cuenta que se trataba de una banda o agrupación destinada a cometer delitos.

DÉCIMO SÉPTIMO: *Descarta otras alegaciones de la defensa.* Que sin perjuicio de que el tribunal se ha hecho cargo en la etapa de valoración de la prueba de varias de las alegaciones de la defensa, principalmente de las referentes al delito de robo con violencia y la participación de Ormeño en éste, corresponde abordar aquellas respecto de las cuales aún el tribunal no se ha pronunciado.

En sus alegatos de apertura la defensa argumentó, en relación con la sustracción de madera, que, si efectivamente los acusados hubiesen sido observados por algún trabajador forestal, entonces los primeros se hubiesen dado cuenta y que ello no pasó porque ningún trabajador fue atacado. Sobre el punto, el testigo Mario Lagos, que fue quien observó a los conductores, explicó de manera clara que él se escondió para que lo no vieran, debiendo considerarse además que cuando se produce el avistamiento ya estaba oscuro.

La defensa reclamó que, pese a la tecnología con la que cuenta Forestal Arauco, no existiese alguna imagen para acreditar la sustracción, haciendo alusión por ejemplo a los drones con visión nocturna. En relación con ese reproche, debe decirse que más allá de lo que hubiese esperado como prueba el defensor, lo cierto es que los elementos aportados al juicio resultaron suficientes para establecer la ocurrencia de la sustracción y para acreditar la participación delictiva, debiendo recordarse la libertad probatoria que rige en materia procesal penal y el sistema de valoración conforme a

las reglas de la sana crítica, que significan que cualquier medio apto para producir fe, en la medida que cumpla con los debidos criterios de corroboración, puede llevar a la convicción de condena.

Otro de los cuestionamientos que hizo la defensa fue a la circunstancia de que el testigo Mario Lagos no llamara de inmediato a los Carabineros cuando vio a los sujetos sacando madera del predio. Entiende el tribunal que lo que se busca con dicha alegación es atacar la credibilidad de los dichos de este testigo, lo que será descartado, pues su declaración encontró respaldo en el testimonio de los otros supervisores forestales. También en relación con el testigo Lagos, el defensor cuestionó que, pese a haber señalado que era la primera vez que ingresaba al predio San José de Colico, pudiese caminar y no perderse en un bosque oscuro. Al respecto, debe señalarse que Mario Lagos explicó al tribunal que antes de ingresar al predio, le dieron las coordenadas del lugar de la sustracción y que así se guió.

En relación con el delito de amenazas y sus requisitos de seriedad y verosimilitud, la defensa esgrimió que ninguno de los supervisores había recibido una amenaza posterior. Tal argumento debe rechazarse porque la seriedad y verosimilitud no dependen de si la amenaza se repite, habiendo ya explicado el tribunal las razones por las cuales en el caso de autos las amenazas fueron serias y verosímiles.

Según la defensa, el único elemento que había para condenar por la sustracción de madera era la declaración de la perito Rodríguez y que ésta no podía afirmar con certeza que la madera de las camiones era del predio San José de Colico. Para desestimar tales alegaciones, basta con recordar que la declaración de la perito solo vino a reforzar la convicción a la que permitió llegar la prueba testimonial.

DÉCIMO OCTAVO: *Audiencia de determinación de la pena. Alegaciones de los intervinientes.* El **Ministerio Público** señala en relación con el acusado Riquelme Cuevas, que mantiene su petición de 541 días de presidio menor en su grado medio, ya que goza de irreprochable conducta anterior, multa de 90 unidades tributarias mensuales, accesorias legales y no vislumbra algún impedimento para pena sustitutiva.

Respecto de Garcés Ríos, indica que no le benefician ni perjudican circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y por la extensión del mal causado, el fiscal dice que mantiene su petición de pena de tres años de presidio menor en su grado medio, accesorias legales, multa de 90 unidades tributarias mensuales y las costas de la causa. Incorpora su extracto de filiación y antecedentes. Nombre: César Atricio Garcés Ríos. R.U.N.:13.803.180-2. Fecha de nacimiento: 22 agosto 1972. Registro general de condenas: Causa N°7/2019. Tribunal: De Garantía de Curanilahue. Delito: autor de conduc. estado de ebriedad con o sin daños o

lesiones leves en su grado de consumado. Resolución: 23 septiembre 2019. Condenado a multa de 0.3 unidad tributaria mensual, a 21 días de prisión en su grado medio, pena remitida. Multa pagada el 28-10-2019. Registro especial de condenas por actos de violencia intrafamiliar: sin anotaciones. Emitido el 14 de marzo de 2014. Por lo anterior, el fiscal indica que vislumbra, si es que se acredita por la defensa, que también podría tener acceso a una pena sustitutiva.

Respecto del acusado Ormeño Gómez, atendida la extensión del mal causado y que no le benefician ni perjudican circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, pide la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio. Respecto del delito de sustracción de madera, tipo hurto simple, pide la pena de tres años de presidio menor en su grado medio, accesorias legales y costas de la causa. Tratándose del delito de amenazas, solicita la pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo. Incorpora su extracto de filiación y antecedentes para acreditar que no goza de irreprochable conducta anterior. Nombre: Rodrigo Alejandro Ormeño Gómez. R.U.N.: 13.578.781-7. Fecha nacimiento: 19 mayo 1979. Registro general de condenas: causa N°26.816/1996. Delito robo con fuerza y receptación. Condenado el 17 de octubre de 1998 a 70 días de presidio menor en su grado mínimo. Pena remitida. Causa N°28.856/2000. Delito: autor de tráfico de estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 5 de la Ley 19.366. Condenado el 10 de noviembre de 2003 a 541 días de presidio menor en su grado medio, multa de 40 unidades tributarias mensuales. Pena cumplida el 07-01-2005. Causa N°2/2007. Delito: autor de robo con violencia consumado (4). Condenado el 30 de enero de 2007 a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. Pena cumplida el 05-03-2015. Causa N°1.355. Delito: autor de receptación. Condenado el 5 de marzo de 2007 a multa de 4 unidades tributarias mensuales. Causa N°665/2015. Delito: autor de tráfico ilícito de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas en pequeñas cantidades, en grado de consumado, previsto y sancionado en los artículos 1° y 4° de la Ley N°20.000. Condenado el 17 de noviembre de 2015 a 220 días de presidio menor en su grado mínimo, multa de 5 unidades tributarias mensuales. Causa N°6.089/2016. Delito: autor consumado de tráfico de pequeñas cantidades art. 4. Condenado el 16 de noviembre de 2016 a 541 días de presidio menor en su grado medio, multa de 10 unidades tributarias mensuales. Pena cumplida el 02-12-2017. Causa N°20/2023. Delito: autor de amenazas a Carabineros, previsto y sancionado en el artículo 417 del Código de Justicia Militar, en relación al artículo 296 del Código Penal, en grado de consumado. Condenado el 16 de mayo de 2023 a 540 días de presidio menor en su grado mínimo. Causa N°210/2023. Delito: autor consumado de amenazas simples artículo 296 N°3 del Código Penal. Condenado el 21 de febrero de 2024 a 61 días de presidio menor en

su grado mínimo. Registro especial de condenas por actos de violencia intrafamiliar: sin anotaciones. Emitido el 14 de marzo de 2024. Expone que las condenas por amenazas que figuran en su extracto no inciden en la pena a imponer por cuanto dichas condenas son posteriores a los hechos por los cuales ha sido acusado en el presente juicio. Que tampoco influye la condena por robo con violencia atendido el tiempo transcurrido.

La **querellante Forestal Arauco**, respecto de la condena en contra de Ormeño Gómez por el delito de amenazas, pide la pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, más las accesorias legales. Por el delito de sustracción de madera, pide se imponga a Riquelme, la pena de 800 días de presidio menor en su grado medio, por el daño causado al patrimonio de Forestal Arauco y las modalidades en que cometió el ilícito. Tratándose de Ormeño y Garcés, pide se les imponga la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo para ambos encartados y en todos los casos las accesorias legales correspondientes y la pena de comiso. Sobre la pena de multa, adhiere a la solicitud del Ministerio Público. En cuanto a penas sustitutivas, estará a lo que el tribunal establezca.

La **querellante Delegación Presidencial Regional del Biobío** dice que adhiere a lo solicitado por el fiscal. Reconoce a Riquelme Cuevas su irreprochable conducta anterior, mantiene solicitud de pena de 3 años y respecto de Ormeño mantiene solicitud de pena de 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio. En lo demás dice que adhiere al fiscal.

La **defensa** de los tres acusados, respecto de Ormeño, por el delito de robo con violencia y no viendo razón para aplicar la pena en el máximo, pide se imponga la pena de 5 años y un día. Respecto del delito de sustracción de madera, entiende que hay una menor extensión del mal causado, porque son dos camiones, es una Forestal inmensa y las especies fueron recuperadas, por lo que pide la pena de 541 días respecto de los tres acusados. En cuanto a la pena de multa, pide que no se imponga y en caso de que se imponga, invoca el artículo 70 del Código Penal y pide que respecto de Ormeño se aplique un tercio de unidad tributaria mensual, porque ha estado privado de libertad y seguirá privado, se le debiera presumir pobre. Respecto de las amenazas, pide se imponga a Ormeño la pena de 61 días. En cuanto al acusado Riquelme, pide se le aplique la remisión condicional de la pena. Respecto de Garcés, aduce que la condena que registra, en concreto es una pena de falta, por lo que debiera considerarse prescrita. Por lo anterior también pide la remisión condicional de la pena tratándose de Garcés. Para fundar sus solicitudes de remisión condicional, alega que son choferes, trabajadores, tienen licencia profesional, tienen preparación para manejar camiones, tienen familia, han cumplido la medida cautelar impuesta,

comparecieron al juicio en libertad. Respecto de las costas, pide que respecto de Ormeño se le exima de ellas porque deberá cumplir una pena privativa de libertad y respecto de los demás acusados pide lo mismo, argumentando que son choferes, por estar sujetos a los controles de Gendarmería y que deberán pagar una multa. Hace presente los abonos de los acusados, que son coincidentes con lo que se señalan en el auto de apertura y pide se le reconozcan a los acusados.

A la solicitud de pena sustitutiva del defensor, se opone la **querellante Delegación Presidencial Regional del Biobío**, por entender que no se han acreditado los requisitos del artículo 4° letra c) de la Ley 18.216. Por su parte, la **querellante Forestal Arauco**, también se opone por las mismas razones y lo mismo respecto de una eventual libertad vigilada.

DÉCIMO NOVENO: *Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal ajenas al hecho punible.* Que según lo reconoció el Ministerio Público y según se desprende de su extracto de filiación y antecedentes, favorece al acusado Freddy Riquelme Cuevas la circunstancia atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior. Respecto del acusado Rodrigo Ormeño Gómez, si bien el querellante Forestal Arauco en su acusación particular invocó a su respecto la circunstancia agravante del artículo 12 N°15 del Código Penal, en la audiencia prevista en el artículo 343 del Código Procesal Penal no insistió en su configuración. En todo caso, de la revisión de su extracto de filiación y antecedentes se desprende que, si bien registra varias condenas, ellas no pueden servir de fundamento para la agravante referida, atendido el tiempo transcurrido y lo previsto en el artículo 104 del Código Penal. Respecto de las condenas que registra por los delitos de amenazas en la causa N°20/2023 de este tribunal y 210/2023 del Juzgado de Garantía de Arauco y que no se encuentran prescritas, ellas tampoco permiten configurar la reincidencia invocada en la acusación del querellante, por tratarse de condenas posteriores.

VIGÉSIMO: *Regulación de la pena.* Que el delito de **robo con violencia** por el cual resultó condenado el encartado Ormeño Gómez se encuentra sancionado en el artículo 436 del Código Penal con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a máximo. Para determinar la pena a imponerle, corresponde aplicar la regla primera del artículo 449 del Código Penal. Atendido que no le benefician ni perjudican circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, se atenderá únicamente a la extensión del mal causado por el delito. En este caso, considerando el número de víctimas afectadas por el hecho ilícito, que todas ellas resultaron con lesiones y que se afectó el derecho a la inviolabilidad del hogar al ingresar el acusado y otros sujetos a tres domicilios distintos, se ha decidido imponer la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo.

En cuanto al delito de **amenazas simples**, por el cual se condenó a Ormeño, éste se encuentra sancionado en el artículo 296 N°3 del Código Penal con la pena de presidio menor en su grado mínimo. No concurriendo circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y conforme con lo dispuesto en el artículo 67 inciso 1° del Código Penal, el tribunal puede recorrer toda la extensión de la pena y en este caso se ha decidido imponer la pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo, considerando que fueron dos las personas amenazadas.

En lo que dice relación con el delito de **sustracción de madera, tipo hurto simple**, previsto y sancionado en el artículo 448 septies del Código Penal, en relación con los artículos 432 y 446 N°2 del mismo cuerpo legal por el cual fueron condenados los tres acusados, la pena abstracta de este delito es la de presidio menor en su grado medio. Respecto de los acusados Ormeño y Garcés, no concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, siendo aplicable lo dispuesto por la regla primera del artículo 449 del Código Penal, resolviendo el tribunal imponerles la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, considerando el criterio de la menor extensión del daño causado, atendido que las maderas fueron recuperadas. La misma pena se aplicará a Freddy Riquelme, considerando de manera adicional en su caso, que goza de irreprochable conducta anterior.

Además, el delito de **sustracción de madera, tipo hurto simple** en cuestión lleva aparejada una pena de multa, que, en el caso de autos, atendido el valor de la madera sustraída, corresponde a la prevista en el artículo 448 septies inciso 1° del Código Penal, esto es, de 75 a 100 unidades tributarias mensuales. En cuanto a la petición de la defensa de no imponer pena de multa alguna, se rechazará dicha solicitud, ya que, tratándose de una pena expresamente asignada al delito, el tribunal no puede dejar de imponerla. Sin perjuicio de lo anterior se accederá a imponer una multa inferior al monto señalado en la ley, haciendo aplicación el tribunal de lo dispuesto en el artículo 70 del Código Penal, pero solo respecto del acusado Freddy Riquelme.

Tratándose del acusado Riquelme, estima el tribunal que se configura el caso calificado al que alude el artículo 70, porque no le perjudican circunstancias agravantes, pero fundamentalmente dada su irreprochable conducta anterior. Teniendo presente lo anterior y que resultó acreditado que se desempeña como chofer sin que conste que cuenta con otra fuente de ingreso, se le impondrá una multa equivalente a 40 unidades tributarias mensuales.

En el caso del acusado César Garcés, atendido que no goza de irreprochable conducta anterior que es el fundamento principal que ha tenido el tribunal para imponerle una multa inferior al mínimo legal al acusado Riquelme y sin que se hayan

aportado otros antecedentes que permitan configurar un caso calificado, se ha decidido que deberá pagar el mínimo de la multa asignada al delito, esto es, 75 unidades tributarias mensuales, atendido que por su labor de chofer resulta difícil estimar que posea un gran patrimonio.

Por último, tratándose del acusado Rodrigo Ormeño, tampoco se han aportado antecedentes que permitan la aplicación del artículo 70 del Código Penal, teniendo presente además que según él mismo reconoció, era dueño de una empresa forestal. Sin perjuicio de lo anterior, se le impondrá el mínimo de la multa, esto es, 75 unidades tributarias mensuales, considerando que se encuentra privado de libertad lo que hace presumir que su actividad económica ha disminuido.

VIGÉSIMO PRIMERO: *Cumplimiento efectivo de las penas respecto del acusado Ormeño.* Que, teniendo en consideración las condenas que le impondrán al acusado Rodrigo Ormeño y lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°18.216, el encartado deberá dar cumplimiento efectivo a las penas que se señalarán en la parte resolutive de la sentencia, sirviéndole de abono a la pena que se le impondrá por el delito de robo con violencia los días que permaneció en prisión preventiva con motivo de esta causa.

VIGÉSIMO SEGUNDO: *Aplicación de penas sustitutivas respecto de los acusados Riquelme y Garcés.* Que atendida la extensión de la pena que se les impondrá, tanto Freddy Riquelme como César Garcés reúnen los requisitos previstos en la letra a) del artículo 4° de la Ley N°18.216. En cuanto al requisito de la letra b), Riquelme goza de irreprochable conducta anterior. Respecto de César Garcés, si bien éste registra una condena, la pena concreta que se le impuso correspondió a una pena de falta. En este escenario, entienden estos jueces que cuando la norma del artículo 4° dispone que no se considerarán las condenas cumplidas diez o cinco años antes, distinguiendo entre crímenes y simples delitos, se está refiriendo a la pena en concreto que se le aplicó al condenado, pues la disposición habla de “*condenado anteriormente*” y “*condenas cumplidas*”, lo que da cuenta que es el cumplimiento particular de la pena a lo que atiende y no a la extensión temporal que tiene asignado el tipo penal en abstracto. Así lo ha sostenido, por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt: “*Que, respecto a la procedencia de la sustitución de la pena por la remisión condicional de la misma, debe considerarse que el artículo 4 literal b) de la Ley 18.216, establece como requisito de procedencia de dicho beneficio que “Si el penado no hubiese sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. En todo caso, no se considerarán para estos efectos las condenas cumplidas diez o cinco años antes, respectivamente, de la comisión del nuevo ilícito”, resultando relevante*

considerar que no le otorga relevancia a las penas de falta para decidir acerca del acceso a las penas sustitutivas. (El subrayado es nuestro)

Que, por otra parte, realizando una interpretación sistemática de las normas de la Ley 18.216 -marco jurídico que regula el tema que se revisa ante esta Corte-, es posible verificar que se distingue la procedencia de diferentes penas sustitutivas recurriendo, como criterio axial, al quantum de pena concreta, la cual es reflejo, a su vez, de la pena abstracta ajustada por el grado de culpabilidad del infractor. De lo que se concluye que, para los efectos de determinar la procedencia de los requisitos de las penas sustitutivas, debe estarse a la pena en concreto aplicadas en cada caso". (El subrayado es nuestro; Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Rol Penal N°1049-2020, sentencia de 21 de enero de 2021, considerandos primero y segundo). En el mismo sentido Rol 1142-2019, Corte de Apelaciones de San Miguel.

Que, en consecuencia, César Garcés cumple con el requisito del artículo 4° letra b) de la Ley N°18.216, es decir, no haber sido condenado previamente por crimen o simple delito.

En cuanto a las exigencias contempladas en el artículo 4° letra c), a juicio de estos sentenciadores, en el caso sublite, concurren también los prepuestos allí indicados. Para arribar a la conclusión anterior, se ha considerado, que el delito del que han resultado responsables Riquelme y Garcés no implicó afectación de bienes jurídicos como la integridad física o la vida de una persona, sino que patrimoniales. Además, si bien Garcés registra una condena previa, han pasado casi cinco años desde dicha condena, sin que se haya tratado tampoco de un delito violento. En el caso de Riquelme, su conducta anterior no merece reproche desde el punto de vista penal. Además, y en lo que dice relación con sus antecedentes personales, se trata de dos personas que se desempeñan como choferes, de manera que entiende el tribunal que en la medida que cumplan con ejercer de manera adecuada dicho empleo que les permita la generación de ingresos, no tendrán la motivación de cometer nuevos atentados patrimoniales.

Considerando lo ya razonado y conforme a lo dispuesto en la letra d) del artículo 4°, aparece innecesaria una intervención o la ejecución efectiva de la pena, estimando el tribunal que las condiciones del artículo 5° de la Ley N°18.216 resultan suficientes para controlar a los acusados y atendido que el contexto comunitario resulta más apto para la reinserción social que la cárcel, que supone el contacto con pares delictivos. Por último, no debe olvidarse que la remisión condicional, por más benigna que parezca, no deja de ser una pena, pues implica la restricción de la libertad del condenado, como por ejemplo su obligación de residir en un lugar determinado, que solo puede ser cambiado en casos especiales.

En consecuencia, y reuniendo los requisitos legales para ello, se procederá a sustituir la pena privativa de libertad que se impondrá a los encausados Garcés y Riquelme, por la de remisión condicional.

VIGÉSIMO TERCERO: *Aplicación del artículo 38 de la ley 18.216.* Que, por reunirse los presupuestos a que alude la disposición enunciada, por cuanto el sentenciado Freddy Riquelme Cuevas goza de irreprochable conducta anterior y la condena previa del acusado César Garcés Ríos se ha estimado una pena de falta y por lo tanto se entiende que no ha sido condenado por delito para efectos de esta ley y teniendo presente que a ambos se les aplicará en este fallo una pena sustitutiva, se ordenará la omisión en los certificados de antecedentes de las anotaciones a que diere origen la presente sentencia condenatoria.

VIGÉSIMO CUARTO: *Abonos.* Que según se desprende de la información contenida en el auto de apertura, ratificada en la audiencia respectiva por los intervinientes y del certificado emitido por la ministra de fe del tribunal, el acusado Rodrigo Ormeño permaneció en prisión preventiva con ocasión de esta causa desde el 13 de octubre de 2022 hasta el 1 de septiembre de 2023, lo que arroja un total de abonos equivalente a 324 días. En el caso del encartado César Garcés, se mantiene con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno desde el 13 de octubre de 2022 hasta la fecha, por lo que, hecha la conversión respectiva, da un total de abonos de 349 días. En el caso de Freddy Riquelme, no hay abonos a considerar.

VIGÉSIMO QUINTO: *Costas de la causa.* Que a los encartados Ormeño, Riquelme y Garcés se les eximirá del pago de las costas, considerando lo gravoso de la multa que deberán pagar, que no se acogió la calificación jurídica de la querellante Forestal Arauco y teniendo presente, además, en el caso de Ormeño, que se encuentra privado de libertad, lo que permite presumir que sus ingresos han disminuido de manera significativa por no estar desarrollando una actividad laboral de manera estable.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1°, 11 N°6, 15 N°1 y N°3, 21, 24, 25, 28, 30, 50, 67, 69, 296 N°3, 432, 436, 439, 446 N°2, 448 septies y 449 del Código Penal; 1°, 4°, 36, 45, 47, 281, 295, 296, 297, 299, 319, 323, 325, 326, 328, 329, 332, 333, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 346 y 348 del Código Procesal Penal; 1°, 4° y 5° de la Ley N°18.216 e Instrucciones de Pleno de la Excma. Corte Suprema sobre la forma y contenido de las sentencias dictadas por los Tribunales de la Reforma Procesal Penal, se declara:

I.- Que se **condena** al acusado **Rodrigo Alejandro Ormeño Gómez**, ya individualizado, a la pena de **siete años de presidio mayor en su grado mínimo** y a las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos

y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en su calidad de autor del delito de **robo con violencia**, en grado de ejecución consumado, previsto y sancionado en el artículo 436 inciso 1° del Código Penal en relación con los artículos 432 y 439 del mismo texto legal, ocurrido el 31 de enero del año 2021, aproximadamente a las 02:00 horas, en el Fundo Chilcoco, sector Agua Pie, comuna de Arauco.

II.- Que se condena al acusado **Rodrigo Alejandro Ormeño Gómez**, ya individualizado, a la pena de **trescientos días de presidio menor en su grado mínimo** y a la pena accesoria legal de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, en su calidad de autor de un delito de **amenazas simples**, en grado de ejecución consumado, contemplado en el artículo 296 N°3 del Código Penal, ocurrido la madrugada del 4 de octubre de 2022, en la comuna de Curanilahue.

III.- Que se condena al acusado **Rodrigo Alejandro Ormeño Gómez**, ya individualizado, a la pena de **541 días de presidio menor en su grado medio**, al pago de una **multa de 75 unidades tributarias mensuales** y a la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, en su calidad de autor del delito de **sustracción de madera, tipo hurto simple**, en grado de ejecución consumado, previsto y sancionado en el artículo 448 septies del Código Penal, en relación con los artículos 432 y 446 N°2 del mismo cuerpo legal, ocurrido la madrugada del 4 de octubre de 2022, en el predio forestal San José de Colico, de la comuna de Curanilahue.

IV.- Que se autoriza al sentenciado Ormeño el pago de la multa en diez parcialidades de 7,5 unidades tributarias mensuales cada una, debiendo ser pagada la primera parcialidad a más tardar el último día hábil del mes siguiente a aquél en que quede ejecutoriada la sentencia, y así sucesivamente.

V.- Que las penas temporales el sentenciado Ormeño Gómez deberá cumplirlas de manera efectiva y sucesiva, principiando por la pena de presidio mayor en su grado mínimo impuesta por el delito de robo con violencia, sirviéndole de abono a dicha pena 324 días, conforme a lo expuesto en el considerando vigésimo cuarto.

VI.- Que se condena al acusado **César Atricio Garcés Ríos**, ya individualizado, a la pena de **541 días de presidio menor en su grado medio**, al pago de una **multa de 75 unidades tributarias mensuales** y a la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, en su calidad de autor del delito de **sustracción de madera, tipo hurto simple**, en grado de ejecución consumado, previsto y sancionado en el artículo 448 septies del Código Penal, en relación con los artículos 432 y 446 N°2 del mismo cuerpo legal, ocurrido la

mañana del 4 de octubre de 2022, en el predio forestal San José de Colico, de la comuna de Curanilahue.

VII.- Que se autoriza al sentenciado Garcés el pago de la multa en diez parcialidades de 7,5 unidades tributarias mensuales cada una, debiendo ser pagada la primera parcialidad a más tardar el último día hábil del mes siguiente a aquél en que quede ejecutoriada la sentencia, y así sucesivamente.

VIII.- Que reuniéndose los requisitos del artículo 4° de la Ley N°18.216, se sustituye al sentenciado Garcés el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta, por la de remisión condicional por el término de 541 días, debiendo presentarse en el Centro de Reinserción Social correspondiente a su domicilio para su cumplimiento, dentro de cinco días hábiles y cumplir con lo dispuesto en el artículo 5° de dicha ley. Oficiése una vez firme el fallo. Si dicha sanción le fuere revocada, y de conformidad con las disposiciones atinentes de la ley citada, deberá satisfacer de manera efectiva la pena corporal de presidio menor impuesta, sirviéndole de abono 349 días, conforme a lo expuesto en el considerando vigésimo cuarto.

IX.- Que se condena al acusado **Freddy Jonathan Riquelme Cuevas**, ya individualizado, a la pena de **541 días de presidio menor en su grado medio**, al pago de una **multa de 40 unidades tributarias mensuales** y a la pena accesorio de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, en su calidad de autor del delito de **sustracción de madera, tipo hurto simple**, en grado de ejecución consumado, previsto y sancionado en el artículo 448 septies del Código Penal, en relación con los artículos 432 y 446 N°2 del mismo cuerpo legal, ocurrido la mañana del 4 de octubre de 2022, en el predio forestal San José de Colico, de la comuna de Curanilahue.

X.- Que se autoriza al sentenciado Riquelme el pago de la multa en diez parcialidades de 4 unidades tributarias mensuales cada una, debiendo ser pagada la primera parcialidad a más tardar el último día hábil del mes siguiente a aquél en que quede ejecutoriada la sentencia, y así sucesivamente.

XI.- Que reuniéndose los requisitos del artículo 4° de la Ley N°18.216, se sustituye al sentenciado Riquelme el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta, por la de remisión condicional por el término de 541 días, debiendo presentarse en el Centro de Reinserción Social correspondiente a su domicilio para su cumplimiento, dentro de cinco días hábiles y cumplir con lo dispuesto en el artículo 5° de dicha ley. Oficiése una vez firme el fallo. Si dicha sanción le fuere revocada, y de conformidad con las disposiciones atinentes de la ley citada, deberá satisfacer de manera efectiva la pena corporal de presidio menor impuesta, sin abonos que considerar por concepto de medidas cautelares.

XII.- Que se decreta el comiso de los camiones placas patentes BFRX-30 y DTRV-39, debiendo el Ministerio Público darles el destino legal correspondiente.

XIII.- En su oportunidad, y respecto del sentenciado Rodrigo Alejandro Ormeño Gómez, dese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N°19.970 y su Reglamento, en la medida que no se haya efectuado con antelación, en los términos que indica el inciso segundo de la disposición legal antes citada.

XIV.- En su oportunidad, dese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N°18.556.

XV.- Que se exime a los sentenciados Ormeño, Garcés y Riquelme del pago de las costas.

XVI.- Cumpliéndose en la especie respecto de los acusados César Atricio Garcés Ríos y Freddy Jonathan Riquelme Cuevas los requisitos previstos en el artículo 38 inciso 1° de la Ley 18.216, ofíciase en su oportunidad al Servicio de Registro Civil para los fines pertinentes.

XVII.- Que para los efectos de lo dispuesto en el artículo 4° del Acta N°44-2022 de la Corte Suprema, se deja constancia que no concurre alguno de los presupuestos de anonimización previstos en dicha disposición.

Acordada la decisión de condena del acusado Rodrigo Alejandro Ormeño Gómez, como autor de un delito de robo con violencia, con el voto en contra del magistrado Cánovas, quien estuvo por absolverlo de dicho delito por estimar que, si bien resultó acreditado el hecho típico, no sucedió lo mismo respecto de la participación que se le imputó al encartado Ormeño, por las consideraciones que se expondrán a continuación.

1) Que de la prueba rendida en juicio se desprende que Juana Fernández Fuentes y Luis Antileo Álvarez señalaron a los funcionarios policiales haber reconocido al acusado Ormeño como uno de los sujetos que cometieron el robo el 31 de enero de 2021. Este disidente no duda que la testigo Fernández haya manifestado a los policías haberlo reconocido, pese a que en juicio negó haberlo hecho. Quedó en evidencia que sí dio esa información, por habersele exhibido una declaración suya que leyó en voz alta en la que da cuenta de dicha identificación y además porque así lo declararon de manera conteste los policías Henríquez, Torres y Cárcamo.

2) Que, sin embargo, el hecho de haberse constatado que hubo un cambio de versión de la víctima Juana Fernández, no permite sin más, afirmar que la que otorgó originalmente corresponda a la verdad. Es factible, como argumentaron los acusadores, que haya modificado sus dichos por miedo al acusado o a represalias. Pero ese es solo un supuesto y no es posible fundar una decisión de condena en un supuesto o en una conjetura. No existen razones suficientes para descartar otra

hipótesis: que la víctima haya errado en su reconocimiento y quisiera genuinamente retractarse, pero sin admitir su error.

3) Que, en el caso de Luis Antileo Álvarez, -quien tampoco ratificó en juicio el reconocimiento del acusado-, la identificación que éste hace ante los funcionarios policiales de Ormeño como uno de asaltantes es incluso menos confiable que la de Juana Fernández para efectos de establecer la participación del encartado. Ello por cuanto, si bien el subcomisario Cárcamo, la oficial Javiera Miranda, Juana Fernández y José Miguel Antileo señalaron en juicio que Luis Antileo dijo haber reconocido al acusado, el cabo 2° de Carabineros Gerardo Torres declaró que Luis Antileo indicó no haber reconocido a alguien y que él había mencionado a El Mentolato porque Juana Fernández lo había reconocido por su voz. Dicha declaración concuerda con lo afirmado por Luis Antileo en juicio, quien dijo que mencionó al acusado porque todos lo estaban nombrando. En consecuencia, es posible que la testigo Fernández haya transmitido la información acerca de la identidad del sujeto y que dicha información se haya ido traspasando de víctima en víctima, incluyendo a Luis Antileo.

4) Que, aun pasando por alto la retractación de Juana Fernández y de Luis Antileo y por lo tanto situándonos en un escenario en el que hubiesen ratificado el reconocimiento que hicieron ante los policías, los elementos en virtud de los cuales fundan dicho reconocimiento resultan insuficientes, siendo necesario recordar que todos los asaltantes estaban encapuchados. En efecto, la contextura física, haber visto que uno de los asaltantes portaba un arma igual a la que le habían visto al acusado previamente y la voz de éste, no otorgan la certeza necesaria para vincular al acusado con el robo y tampoco los demás indicios, esto es, ser una persona conocida por la familia, haber estado antes en el predio, o que el acusado supiera que José Miguel Antileo había recibido mucho dinero.

5) Que, el reconocimiento a través de la voz que según los funcionarios había permitido a Juana Fernández identificar al acusado cuando escuchó hablar a uno de los asaltantes, aparece especialmente débil como forma de atribuir participación en este caso. No debe olvidarse el contexto en el cual Fernández habría escuchado la voz: cuando siete sujetos entran de manera violenta a su domicilio, golpean a su pareja, revisan la casa y buscan especies de valor, todo lo cual genera ruidos que llevan a preguntarse qué tan bien puede haber oído. Tampoco refieren los policías si Juana Fernández explicó alguna peculiaridad de dicha voz.

6) Que, habida consideración de que al acusado no se le encontró ninguna de las especies sustraídas y que la diligencia de reconocimiento fotográfico posterior que hizo Juana Fernández en nada aporta pues ella mismo dio la identidad del sujeto que debía reconocer, la prueba para establecer la participación del encartado se reduce a

las declaraciones de los policías. No obstante, y tal como se ha razonado, las mismas, en lo que al reconocimiento de Ormeño se refiere, pierden valor desde el momento que las propias víctimas de la cual derivan dichas declaraciones, no las mantienen en juicio. En otras palabras, las declaraciones inculpatorias de los funcionarios policiales carecen de eficacia probatoria para acreditar la participación del acusado, pues ellas solo demuestran el hecho de que se recibió una determinada información por parte de los funcionarios, pero no así la verdad de la manifestación recogida. *“En efecto, la declaración previa de la víctima pierde la calidad de fuente de información inculpatoria en el momento que esta declara en el juicio oral en un sentido completamente distinto: de otro modo se estaría consintiendo que de forma indirecta, a través del testigo de oídas, ingresara al proceso información que procesalmente no es aprovechable y no puede ser dotada de eficacia probatoria, burlándose de este modo lo dispuesto en el conjunto normativo de los arts. 296, 331 y 332 CPP, cuando dispone expresamente que ha de preferirse la prueba del juicio oral y restársele eficacia a cualquier actividad indagatoria previa”.* (Tres apuntes sobre el recurso de nulidad y el enjuiciamiento fáctico a propósito de tres fallos de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, Carlos del Río Ferretti, en Revista de Derecho Universidad Católica del Norte-Año 17 N° 1 (2010), pág. 139,).

7) Que, en virtud de todo lo razonado, en concepto de este juez la prueba rendida en juicio no cumplió el estándar exigido en el artículo 340 del Código Procesal Penal, para establecer la autoría del acusado en el delito de robo con violencia, correspondiendo en consecuencia emitir una decisión absolutoria en su favor por este capítulo.

Devuélvase la prueba incorporada en la audiencia de juicio oral.

Ejecutoriada que sea esta sentencia dese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal y comuníquese al Juzgado de Letras y Garantía de Curanilahue para todos los efectos legales pertinentes.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el juez José Martín Cánovas Fuentes.

RUC N°2200976307-8

RIT N°73-2023

**PRONUNCIADA POR LA SALA DEL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO
PENAL DE CAÑETE, INTEGRADA POR LOS JUECES RODRIGO GONZÁLEZ-
FUENTE RUBILAR, JULIO RAMÍREZ PAREDES Y JOSÉ MARTÍN CÁNOVAS
FUENTES.**